

Perfil de país:

Clima, paz y seguridad en HONDURAS



*Ignacio Madurga-Lopez, Julián Higuera-Florez, Nohelia Palou,
Irma Ayes-Rivera, Bia Carneiro, Jonathan Tsoka,
Onivola Minoarivelo, Brigitte Melly, Carlo Montes,
Támara Ochoa-Morera & Grazia Pacillo*



Ireland



CGIAR

CLIMATE
ACTION

FOOD FRONTIERS
AND SECURITY

Contexto climático

40.7
Índice ND-GAIN¹



1.7°C
Incremento de temperatura para 2040 - 2070²



Contexto político y de conflicto

2.347
Índice de paz global³



45.41
Índice de gobernanza⁴



Contexto de vulnerabilidad socioeconómica

45.7
Índice de GINI⁵



0.727
Índice global de brecha de género⁶



1.8 millones
Tasa de inseguridad alimentaria aguda⁷



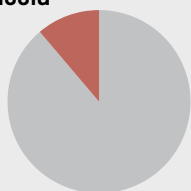
60.1%
Tasa de incidencia de la pobreza⁸



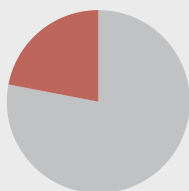
101.000 personas
Total de desplazados internos⁹



11.2%
Dependencia del sector agrícola¹⁰



22%
Empleo en agricultura¹¹



4.6%
Tasa de desempleo¹²



1.7%
Crecimiento poblacional 2023-2024¹³



¹ University of Notre Dame. (2024). ND-GAIN Country Index. Notre Dame Global Adaptation Initiative.

² Bajo el escenario SSP1-2.6: Montes, Carlo & Ayes-Rivera, Irma (2025). Perfil Climático de Honduras: variabilidad, tendencias y escenarios futuros. CGIAR Climate Security; Alianza de Bioversity International y el Centro Internacional de Agricultura Tropical.

³ Institute for Economics & Peace (2025). Global Peace Index 2025: Identifying and Measuring the Factors that Drive Peace. Sydney.

⁴ World Bank (2025). The Worldwide Governance Indicators. Washington, DC: World Bank Group.

⁵ World Bank (2025). Índice de Gini - Honduras 2024. Plataforma de Pobreza y Desigualdad.

⁶ World Economic Forum. (2025). Global Gender Gap Report 2025: Insight Report. June 2025.

⁷ Integrated Food Security Phase Classification (IPC). (2025). Honduras: Acute Food Insecurity Situation for December 2024 - March 2025.

⁸ World Bank. (2025). Tasa de incidencia de la pobreza, sobre la base de la línea de pobreza nacional (% de la población) - Honduras, 2024. Plataforma de Pobreza y Desigualdad.

⁹ World Bank. (2025). Población de desplazados internos, total - Honduras, 2024. World Development Indicators.

¹⁰ World Bank. (2025). Agricultura, silvicultura y pesca, valor agregado (% del PIB) (NV.AGR.TOTL.ZS) - Honduras, 2024. World Development Indicators.

¹¹ World Bank. (2025). Empleo en la agricultura (% del empleo total) - Honduras, 2024. World Development Indicators.

¹² World Bank. (2025). Tasa de desempleo de adultos - Honduras, 2024. Human Capital Data Portal.

¹³ World Bank. (2025). Población total - Honduras, 2023 y 2024. World Development Indicators.



MENSAJES CLAVE

- **La mayoría de los territorios afectados por violencia y conflictos también enfrentan desafíos climáticos significativos**, entre ellos el aumento de las temperaturas, la intensificación de las precipitaciones y la disminución de la lluvia en períodos críticos.
- **Los principales focos de conflictividad socioambiental suelen ubicarse en territorios caracterizados por altas amenazas climáticas** —como el Valle del Sula, el Valle del Aguán y el Corredor Seco—, lo que puede amplificar tensiones relacionadas con el acceso y uso de la tierra y el agua.
- **Las actividades extractivas vinculadas a la conflictividad socioambiental degradan recursos naturales esenciales**, reducen la resiliencia territorial y exacerban la vulnerabilidad de la población frente a sequías, inundaciones y otros eventos climáticos extremos.
- **Los impactos climáticos sobre medios de vida sensibles al clima**, como la agricultura y la pesca, pueden agravar tensiones y conflictos relacionados con el acceso, uso y control de recursos naturales cada vez más limitados.
- **La violencia, las amenazas y el control territorial** ejercido por actores criminales debilitan la gobernanza ambiental y dificultan la implementación de estrategias de adaptación, reducción del riesgo de desastres, y respuesta ante emergencias.



RECOMENDACIONES

- **Generar mayor evidencia científica sobre el nexo clima, paz y seguridad para apoyar la toma de decisiones** es fundamental para visibilizar los riesgos de seguridad climática y sensibilizar a los tomadores de decisiones.
- **Integrar evaluaciones y análisis de conflicto en los programas de acción climática** permite anticipar y mitigar riesgos de daños no intencionados y asegurar que las intervenciones, en la medida de lo posible, contribuyan a abordar dichas problemáticas.
- **Desarrollar e integrar indicadores de paz en las intervenciones de acción climática** que permitan monitorear y evaluar cómo estas iniciativas influyen en las percepciones comunitarias cohesión social, seguridad, confianza y estabilidad dentro de la comunidad.
- **Respetar los procesos de consulta previa, libre e informada** en proyectos de acción climática es crucial para garantizar la participación efectiva de pueblos indígenas y afrodescendientes y asegurar que sus derechos y prioridades sean considerados.
- **Identificar y fortalecer procesos comunitarios de acción climática** es esencial para apoyar iniciativas que ya han surgido desde lo local y que responden de manera efectiva a las necesidades y la realidad del territorio.

1. Introducción

Honduras enfrenta una convergencia de desafíos socioeconómicos estructurales como las altas tasas de pobreza y desigualdad, la informalidad laboral, las deficiencias en infraestructura y la fragilidad institucional. Estos problemas estructurales conviven y a su vez determinan la alta vulnerabilidad del país frente a choques y perturbaciones de diferente índole como las crisis económicas, el cambio climático, los desastres, las crisis sanitarias, la movilidad humana y los riesgos de violencia y conflicto. Las desigualdades históricas, los problemas de inseguridad, la debilidad institucional, la degradación ambiental y la alta exposición a eventos meteorológicos extremos afectan de forma desproporcionada a los sectores más empobrecidos y excluidos de la población. Esta combinación de factores pone en peligro el desarrollo y la estabilidad del país, incluyendo los esfuerzos y avances logrados en la lucha contra la pobreza y la exclusión social, limitando gravemente la capacidad del país para garantizar condiciones de vida dignas y de poder prepararse, responder y recuperarse de forma oportuna de crisis recurrentes, generando ciclos de vulnerabilidad, pobreza y exclusión social que se profundizan con cada nueva emergencia.

El cambio climático y la inseguridad constituyen dos de los principales desafíos que enfrenta Honduras en la actualidad, ya que plantean retos significativos para su desarrollo y estabilidad, amenazando con revertir avances en ámbitos clave como la economía, la educación, la salud, la infraestructura y la seguridad alimentaria. Ambos constituyen riesgos compuestos que pueden interactuar y exacerbarse mutuamente, amplificando sus efectos sobre comunidades e instituciones.

1.1. Cambio climático

El cambio climático ya está teniendo impactos significativos en Honduras, manifestándose en incrementos sostenidos en las temperaturas, la alteración de los patrones de precipitación y el ascenso del nivel del mar, además de agravar la frecuencia e intensidad de eventos climáticos extremos (Navarro Racines et al., 2018; Montes & Ayes Rivera, 2025).

La temperatura media nacional ha aumentado entre +0.8 y +1.2 °C desde 1981 (ver gráfico 1 y 2). Se identificaron anomalías cálidas más frecuentes e intensas desde inicios de los 2000, destacando episodios en 1997, 2015 y 2019. Las olas de calor también han aumentado en frecuencia y duración en el país desde 1981. El promedio anual varía entre 25 y 35 días/año, con los mayores valores en el occidente y norte del país. La tendencia temporal revela un incremento estadísticamente significativo de hasta 8-10 días por década en amplias zonas del occidente y el Caribe (Montes & Ayes Rivera, 2025).

Series de tiempo de (a) temperatura y (b) lluvia mensual a partir de ERA5-Land (1980-2020)

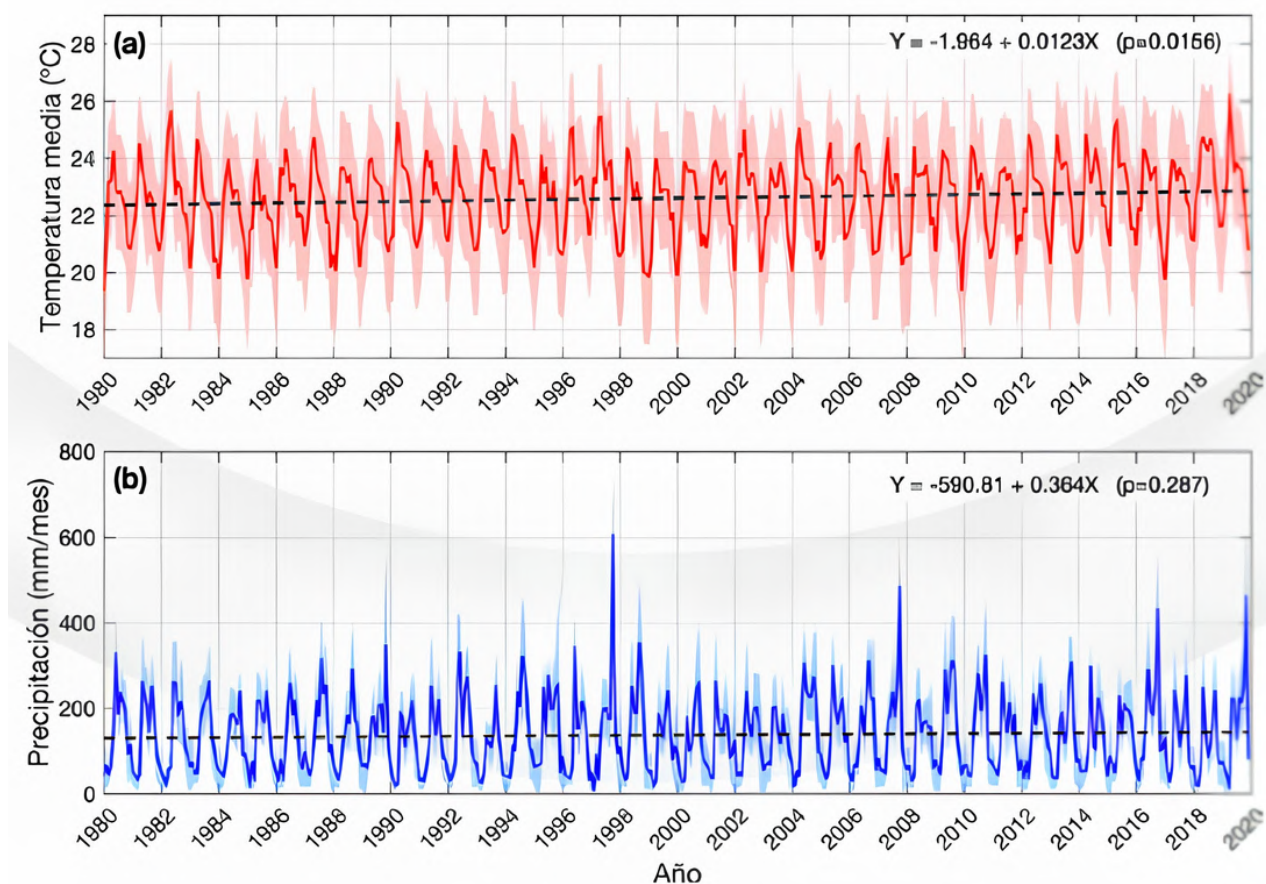


Gráfico 1: Series de tiempo de (a) temperatura y (b) lluvia mensual a partir de ERA5-Land (1980-2020). La línea de color muestra la serie promedio, el área sombreada indica ± 1 desviación estándar espacial, la línea negra segmentada representa el ajuste lineal. Se presenta la ecuación de la tendencia lineal y su valor potencial. Fuente: (Montes & Ayes Rivera, 2025).

Las precipitaciones han mostrado una alta variabilidad interanual sin una tendencia lineal significativa a escala nacional (ver gráfico 1 y 2), pero dominada por la variabilidad intraanual y episodios extremos (ver gráfico 1b). Los picos mensuales más altos corresponden a octubre-noviembre de 1998 (impacto del huracán Mitch) y a septiembre-octubre de 2007 (influencia del huracán Félix). También se observa un máximo en octubre-noviembre de 2020 asociado a Eta/Iota. En contraste, mínimos pronunciados en las precipitaciones se presentan durante El Niño 1997-1998 y 2015-2016, cuando la convección sobre Centroamérica suele debilitarse. El ciclo anual de precipitaciones mantiene dos picos al año con máximos en mayo-junio y septiembre-octubre, separados por un mínimo relativo en julio-agosto consistente con la canícula, un periodo del verano entre julio y agosto durante el cual las lluvias disminuyen notablemente (ver gráfico 3).

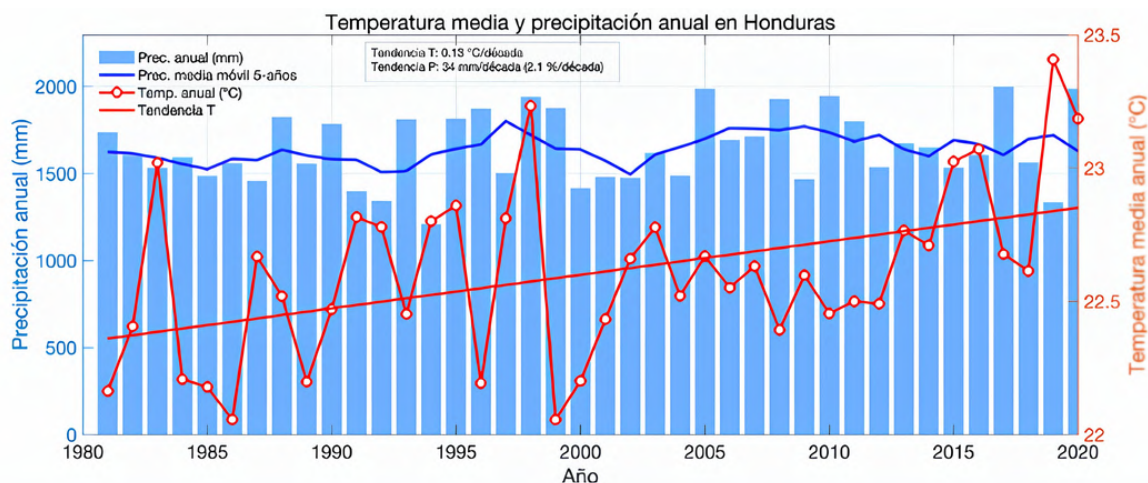


Gráfico 2: Temperatura media y precipitación anual en Honduras (1981-2020): serie temporal nacional elaborada a partir de datos ERA5-Land. Se presentan los valores anuales de precipitación (barras azules, eje izquierdo) y temperatura media (línea roja, eje derecho), junto con sus respectivas tendencias lineales. Fuente: (Montes & Ayes Rivera, 2025).

Distribución mensual de (a) temperatura media (b) precipitación mensual en Honduras

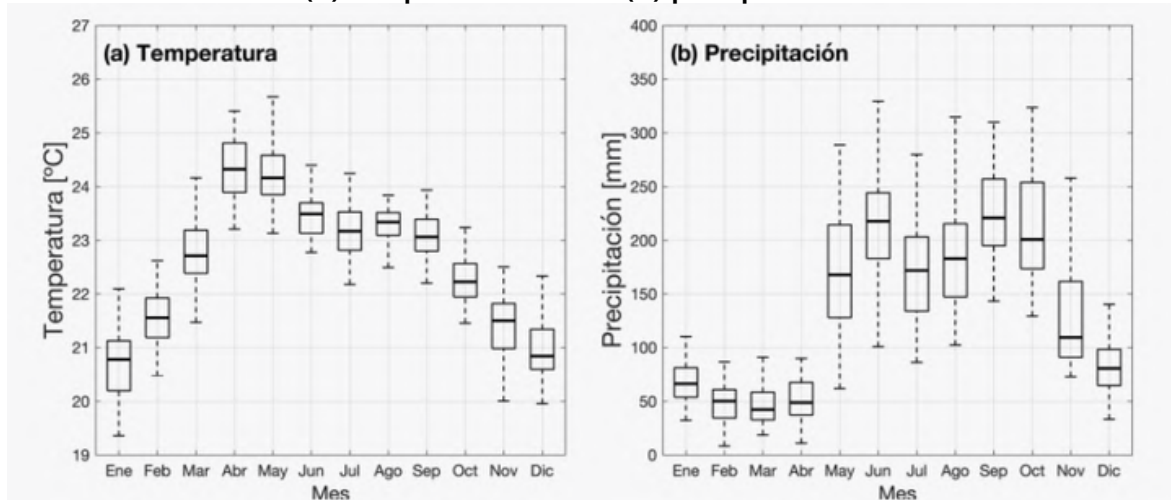


Gráfico 3: Distribución mensual de (a) temperatura media (°C) y (b) precipitación mensual (mm) (promedio 1981 - 2020) a escala país. Línea central representa la mediana, la caja el rango intercuartil, y las líneas discontinuas los percentiles 5 - 95. Fuente: (Montes & Ayes Rivera, 2025).

El país ha experimentado también ciclones tropicales cada vez más intensos, incluyendo huracanes devastadores como Mitch (1998), Eta e Iota (2020) y Julia (2022), los cuales han dejado numerosas víctimas mortales y cuantiosas pérdidas económicas en diferentes sectores. Esta mayor intensidad y volumen de lluvias extremas fue identificada en el norte y occidente del país. Del mismo modo, el fenómeno de El Niño-Oscilación del Sur (ENSO) tiene impacto en la disminución de las lluvias en Honduras cuando se encuentra en su fase cálida (El Niño), afectando especialmente al sur y suroccidente, y aumento de las lluvias en su fase húmeda (La Niña), provocando numerosas pérdidas económicas y afectando especialmente a la seguridad alimentaria e hídrica en las regiones vulnerables del país como el Corredor Seco.

El alto nivel de vulnerabilidad climática de Honduras, entendido en términos de su elevada exposición a amenazas climáticas, la alta sensibilidad de sus sistemas socioeconómicos y su limitada capacidad adaptativa, la sitúa como el tercer país más vulnerable al cambio climático en América Latina (Notre Dame, 2022). En el territorio nacional, el estrés climático se expresa de maneras diferenciadas: el Corredor Seco, propenso a la sequía, enfrenta recurrentes episodios de escasez hídrica, mientras que las zonas costeras continúan altamente expuestas a tormentas tropicales de gran intensidad. Esta vulnerabilidad se prevé que aumente en las próximas décadas conforme se profundicen las tendencias climáticas actuales (Montes & Ayes Rivera, 2025).

Las proyecciones indican un aumento de temperatura en todo el territorio de entre +1.5 y +2.5 °C para 2040-2070 bajo el escenario SSP1-2.6 y de entre +3.5 a +4.5 °C para el año 2100 bajo el escenario SSP5-8.5. Según estas estimaciones, la precipitación anual disminuirá entre un -5 % y un -15 %, con mayor variabilidad estacional (ver gráfico 4). En particular, las proyecciones sugieren un acortamiento y debilitamiento de la temporada lluviosa, en concordancia con una intensificación del fenómeno de la canícula. En conjunto, las proyecciones sugieren que Honduras enfrentará un futuro más cálido y potencialmente más seco, especialmente bajo trayectorias de altas emisiones.

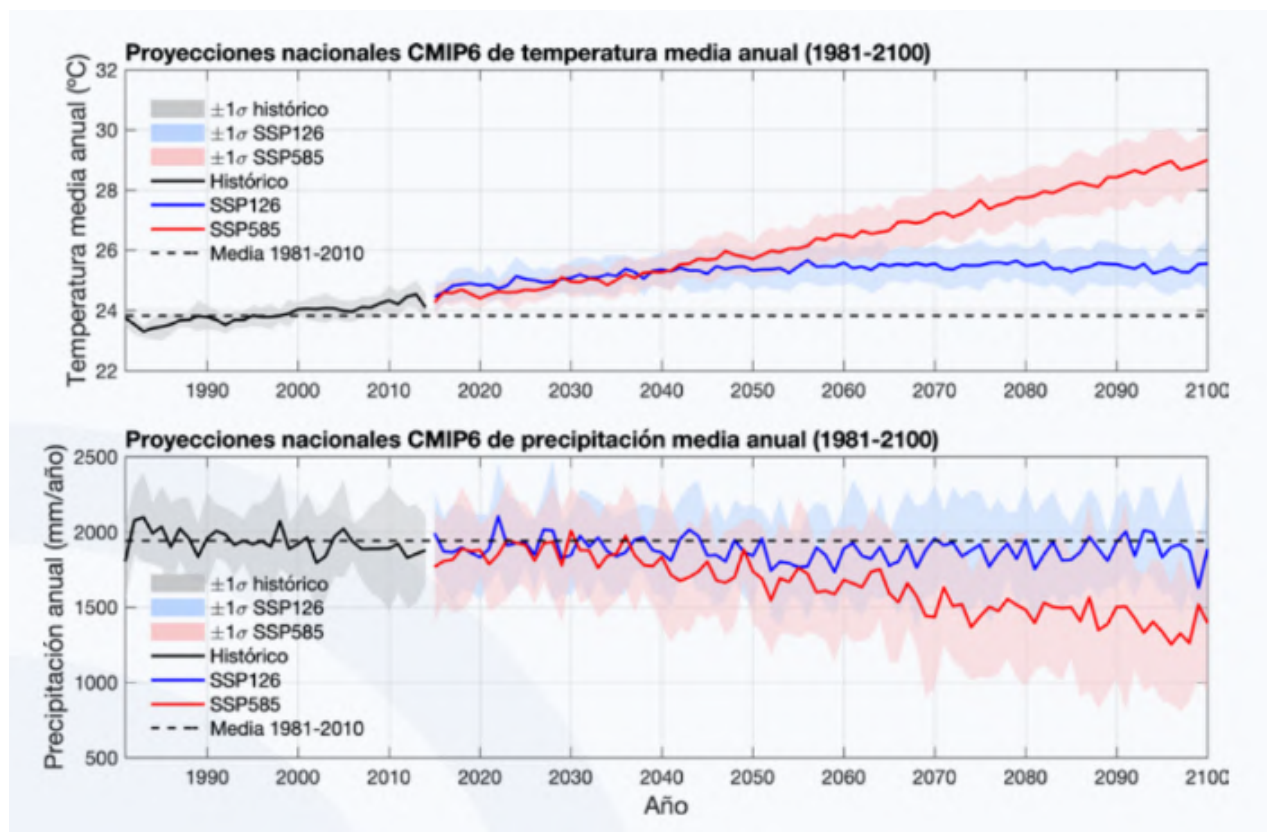


Gráfico 4: Series nacionales de temperatura y precipitación anual proyectadas para Honduras (1981-2100). Las curvas muestran el promedio multi-modelo bajo los escenarios SSP1-2.6 y SSP5-8.5, con bandas sombreadas que representan la dispersión inter-modelo ($\pm 1 \sigma$). La línea discontinua negra indica el promedio histórico 1981-2010. Fuente: (Montes & Ayes Rivera, 2025).



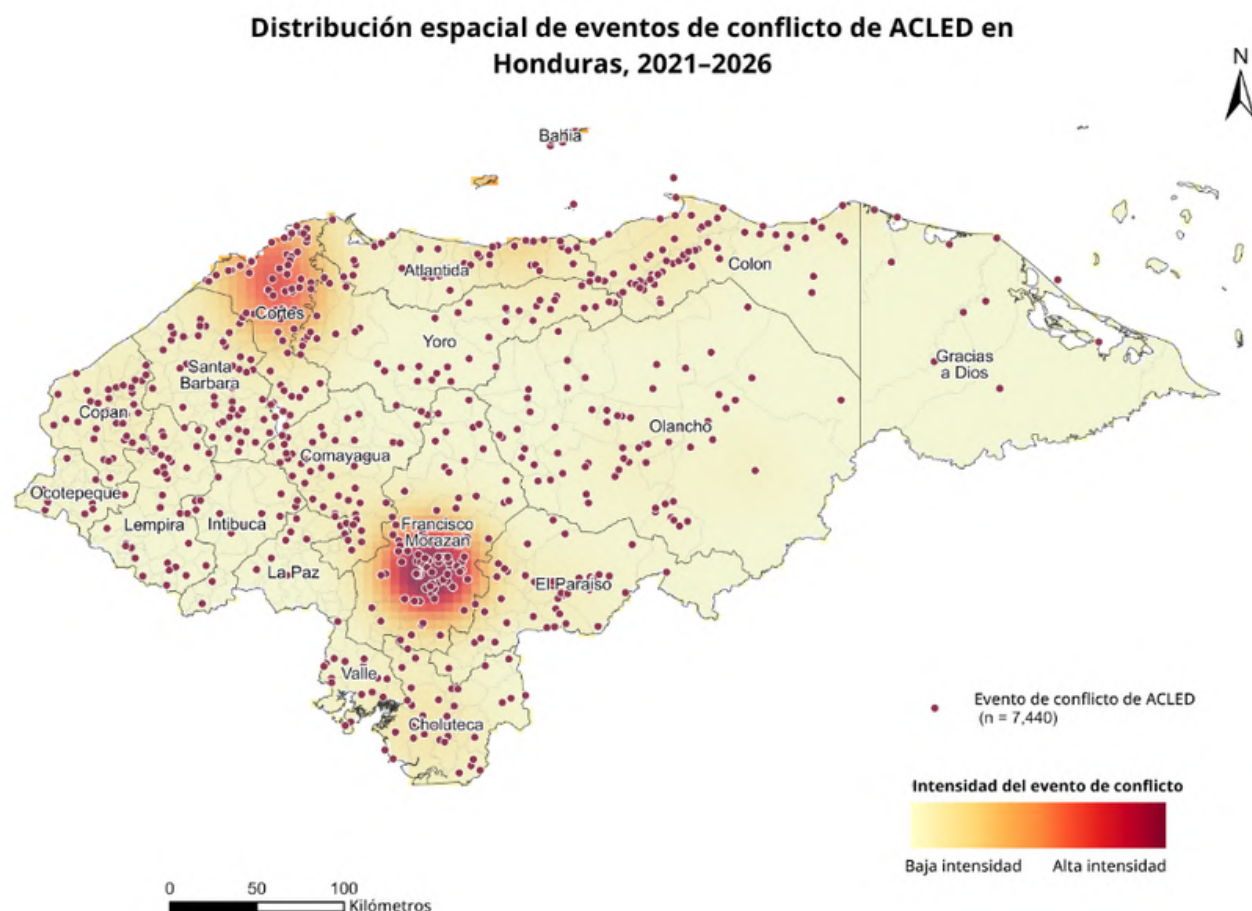
Fotografía: Ignacio Madurga López - Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT)

1.2. Conflictividad y violencia

La historia reciente de Honduras ha estado marcada por inestabilidad política, gobernanza débil, altas tasas de homicidio y criminalidad, así como un ambiente generalizado de inseguridad (ICG, 2023). De acuerdo con el Global Peace Index (GPI), Honduras figura entre los tres países menos pacíficos de Centroamérica y el Caribe, debido principalmente a los altos índices de homicidios, extorsiones y crímenes violentos atribuidos a la expansión de pandillas, crimen organizado y narcotráfico (IEP, 2022). Además, Honduras tiene altos índices de violencia basada en género (VBG), incluyendo la tasa más alta de feminicidios en América Latina: 6 por cada 100,000 mujeres (CEPAL, 2022).

Los problemas de seguridad y violencia en Honduras están profundamente arraigados en desigualdades estructurales de carácter socioeconómico y político (UNODC, 2019; Vásquez-Hernández, 2020). Por ejemplo, se ha encontrado que las tasas extremadamente altas de homicidios entre jóvenes menores de 19 años están correlacionadas con el desempleo juvenil, la deserción escolar y el reclutamiento por parte de pandillas (UNODC, 2019). De manera similar, las desigualdades de género se traducen en altas tasas de violencia basada en género y feminicidios, especialmente en comunidades marginadas propensas a la delincuencia común y la violencia asociada a pandillas (Vásquez-Hernández, 2020).

La evidencia espacial disponible confirma la magnitud y distribución territorial de la violencia y conflictividad en el país. Según datos de ACLED (Proyecto de Datos sobre Ubicación y Eventos de Conflictos Armados, por sus siglas en inglés), se han registrado 7,440 eventos de conflicto entre 2021 y 2026, incluyendo confrontaciones armadas, disturbios, protestas, violencia contra civiles y otros eventos relevantes de conflicto (ver Mapa 1). Estos eventos se concentran principalmente en las grandes áreas metropolitanas del Distrito Central y el Valle de Sula, evidenciando altos niveles de intensidad del conflicto, aunque también se identifican patrones relevantes en departamentos como Colón, Olancho, Comayagua, Atlántida, Lempira, El Paraíso y Choluteca, lo que sugiere una difusión territorial amplia de distintas formas de violencia.

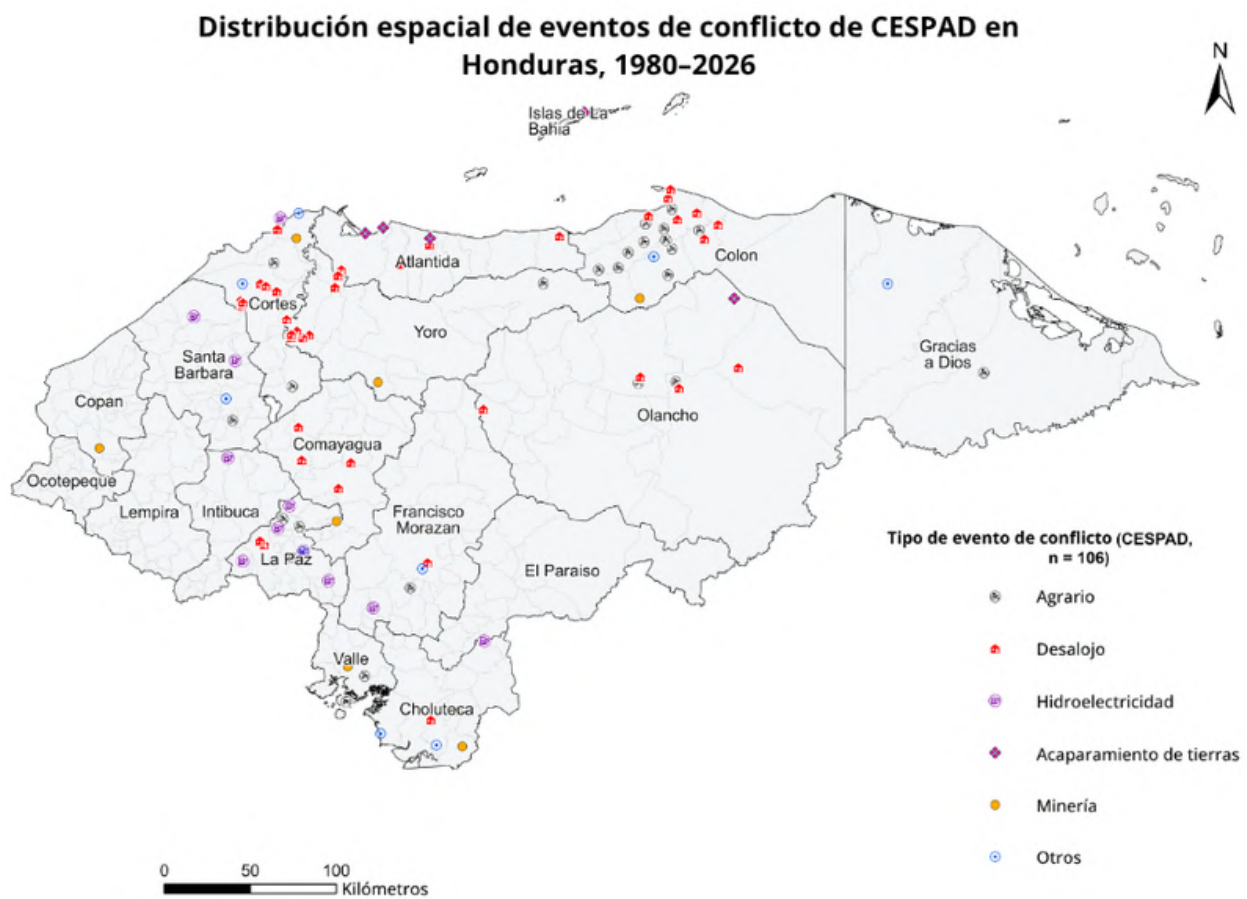


Mapa 1: Distribución espacial de eventos de conflicto en Honduras (2021-2026). Fuente: Elaboración propia con datos de ACLED.

Además, las desigualdades en el acceso de la población a recursos naturales, incluidos la tierra y el agua, también actúan como fuente de conflictos que involucran a comunidades locales, industrias extractivas y al Estado, lo que en ocasiones resulta en represión y el asesinato de activistas de derechos humanos y medioambientales (Hristov & Spring, 2021; Lakhani, 2021). En regiones con conflictos socioambientales activos, como el Bajo Aguán y Santa Bárbara, la débil presencia y gobernabilidad estatal son factores adicionales que profundizan la desconfianza hacia el Estado y contribuyen a la sensación generalizada de inseguridad y tensión social (HRW, 2023).

El análisis de conflictos socioambientales documentados por el *Observatorio de Conflictividad Socioterritorial* de CESPAD (*Centro de Estudio para la Democracia*) identifica al menos 106 casos activos desde 1980, con una distribución espacial y tipológica diferenciada (ver Mapa 2). Estos incluyen conflictos agrarios —particularmente concentrados en el valle del Aguán—, desalojos de tierras comunitarias con mayor incidencia en los valles de Sula y del Aguán, disputas vinculadas a proyectos hidroeléctricos en departamentos como Santa Bárbara, La Paz y otras regiones del sur y occidente, así como conflictos mineros distribuidos a lo largo del país. De igual manera, destacan los casos de acaparamiento de tierras a lo largo de todo el país, aunque con

especial preocupación en la costa Caribe, en donde se han venido desarrollando expulsiones y desplazamiento de comunidades garífunas para impulsar megaproyectos hoteleros, lo cual evidencia la persistencia de tensiones territoriales históricas y estructurales.



Mapa 2: Distribución espacial de conflictos socioambientales y territoriales en Honduras (1980–2026). Elaboración propia con datos del Observatorio de Conflictividad Socioterritorial de CESPAD.

En conjunto, estos patrones evidencian que la conflictividad en Honduras responde a la superposición de múltiples tipologías de violencia que operan en escalas y territorios distintos, pero interrelacionados. Por un lado, los datos de ACLED (Mapa 1) muestran una alta concentración de eventos en centros urbanos y corredores económicos estratégicos, donde predominan dinámicas asociadas a criminalidad organizada, control territorial y violencia contra civiles. Por otro, los datos de CESPAD (Mapa 2) revelan una geografía más dispersa de conflictos socioambientales, vinculados a disputas históricas por la tierra, el acceso a recursos naturales y la expansión de proyectos extractivos y energéticos. Lejos de constituir fenómenos aislados, estas dinámicas tienden a reforzarse mutuamente: la débil presencia estatal en territorios rurales y periféricos facilita tanto la expansión de economías ilegales como la imposición de proyectos que generan despojo y conflictividad social, mientras que en contextos urbanos las desigualdades estructurales alimentan ciclos persistentes de violencia.



2. ¿Cómo se interrelacionan el clima, la paz y la seguridad en Honduras?

La evidencia científica reconoce que el cambio climático no causa conflicto de manera directa, pero sí aumenta su riesgo a través de vías indirectas, afectando dimensiones como la seguridad alimentaria e hídrica, los medios de vida, el acceso a recursos naturales, y la infraestructura pública y privada (Barnett & Adger, 2007; Von Uexkull & Buhaug, 2021; IPCC, 2022). Estas afectaciones, a su vez, pueden intensificar tensiones preexistentes y actuar como multiplicadores de riesgo que, en interacción con factores estructurales, institucionales y relacionales, pueden generar amenazas compuestas para la seguridad. Así, el cambio climático y la inseguridad configuran un “círculo vicioso” en el que los diferentes impactos climáticos exacerban las causas subyacentes de los conflictos y la violencia, mientras que estos aumentan la vulnerabilidad de la población frente a nuevos riesgos climáticos, creando una retroalimentación negativa (Buhaug & von Uexkull, 2021).

No obstante, los impactos climáticos no se traducen automáticamente en mayor conflictividad, ya que las respuestas a estos retos no siempre se orientan al conflicto y, por el contrario, pueden desencadenar en mayor cooperación (Pacillo et al. 2024). De hecho, existe consenso en que la adaptación y la mitigación del cambio climático tienen un potencial como herramientas para apoyar la resolución de conflictos y la construcción de paz (IPCC, 2022; Medina et al. 2024; Krampe et al., 2021). Esto se articula con el campo de la construcción de paz medioambiental, entendida como los enfoques y rutas causales por los que la gestión medioambiental contribuye a la prevención, mitigación, resolución y recuperación de conflictos (Ide et al., 2023). De esta manera, iniciativas como las de acción climática tienen el potencial de fomentar la cooperación y fortalecer los factores estructurales afectados por el cambio climático (Hardt & Scheffran, 2019; Morales-Muñoz et al., 2022), siempre que incorporen un análisis de las dinámicas de conflicto que pueden influir en los resultados de las intervenciones o verse agravadas involuntariamente por estas (Ide, 2020).

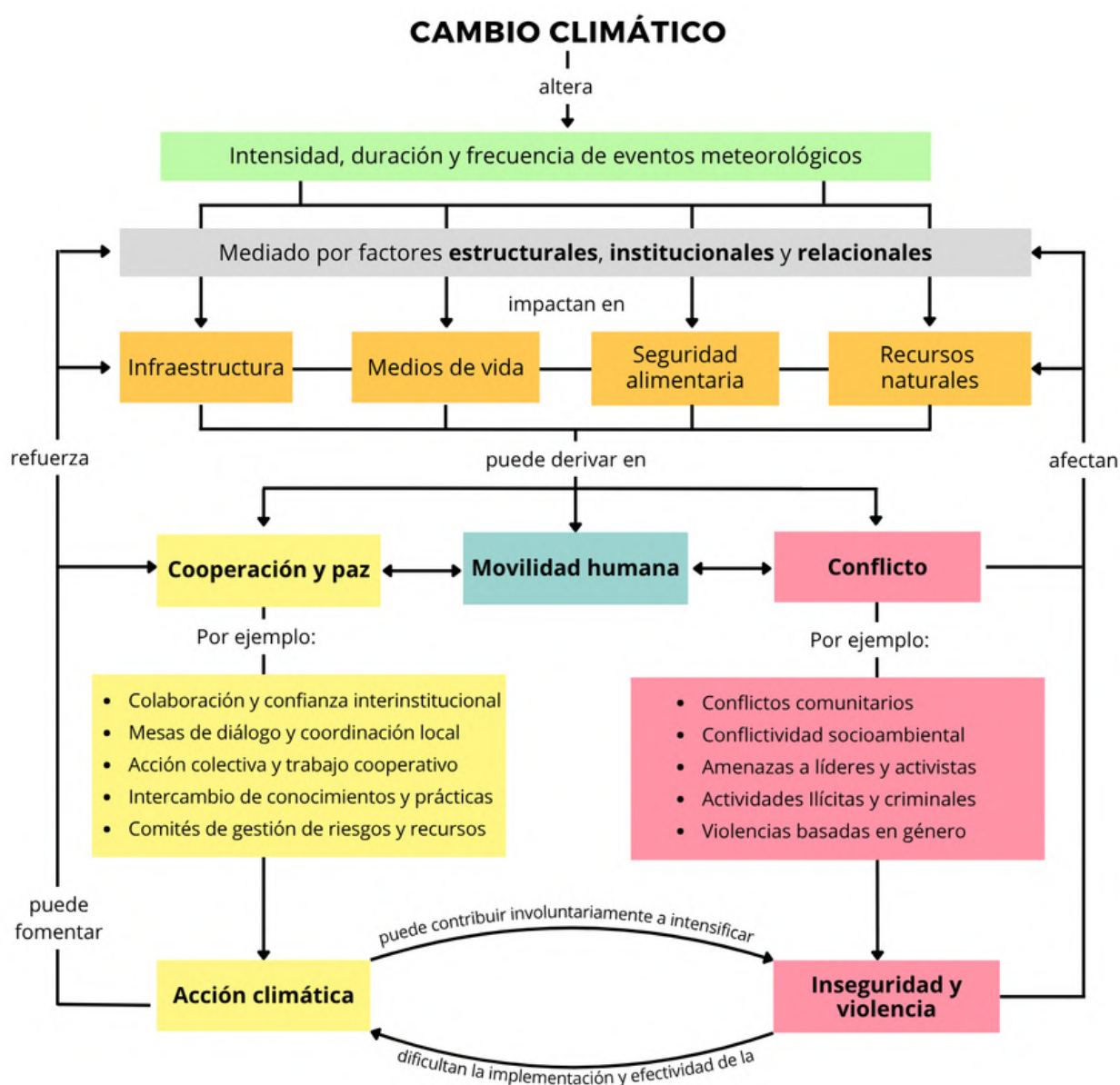


Figura 1: Mapa concepto con las interrelaciones de clima, paz y seguridad en Honduras. Elaboración propia.

El gráfico 5 presenta un marco conceptual para comprender las múltiples interacciones entre cambio climático, paz, movilidad humana, conflicto, acción climática e inseguridad. En la parte superior, se plantea que el cambio climático altera la intensidad, duración y frecuencia de los eventos meteorológicos. Sin embargo, los efectos de estos cambios no son automáticos ni homogéneos, sino que están mediados por factores estructurales, institucionales y relacionales que influyen en la forma en que los impactos climáticos se manifiestan sobre dimensiones clave como la infraestructura, los medios de vida, la seguridad alimentaria y los recursos naturales (ver Pacillo et al., 2024). Estas dimensiones, además, se encuentran interconectadas y pueden reforzar mutuamente las condiciones de vulnerabilidad o resiliencia de las comunidades.

A partir de estas afectaciones, pueden emerger dinámicas de cooperación, movilidad humana y conflicto, las cuales mantienen relaciones bidireccionales entre sí. La cooperación puede materializarse mediante acciones concretas como la colaboración y confianza interinstitucional, las mesas de diálogo, la acción colectiva, el intercambio de conocimientos y los comités de gestión de riesgos y recursos, contribuyendo a fortalecer la acción climática. Por su parte, el conflicto puede expresarse en forma de conflictos comunitarios, conflictividad socioambiental, amenazas contra líderes y activistas, actividades ilícitas y criminales, o violencias basadas en género, derivando en situaciones de inseguridad y violencia. El esquema también destaca la existencia de dinámicas de retroalimentación entre estos procesos: la cooperación puede fomentar la acción climática, mientras que el conflicto puede incrementar la inseguridad y la violencia; a su vez, la inseguridad y la violencia dificultan la implementación y efectividad de las acciones climáticas, y determinadas intervenciones climáticas pueden contribuir involuntariamente a intensificar tensiones o riesgos de conflicto. Asimismo, las dinámicas de cooperación e inseguridad pueden reforzar o afectar las condiciones estructurales, institucionales y relacionales que median los impactos climáticos, evidenciando la naturaleza compleja y bidireccional de las relaciones representadas en el marco conceptual.

A partir de este marco conceptual presentamos las siguientes ocho intersecciones entre clima, paz y seguridad en Honduras, así como casos que las ejemplifican:

I. Las actividades extractivas ligadas a la conflictividad socioambiental reducen la resiliencia de las comunidades y el territorio, exacerbando su vulnerabilidad climática

La conflictividad socioambiental suele estar estrechamente vinculadas con actividades extractivas que contaminan y degradan el medio ambiente, como la deforestación y la tala ilegal, la minería ilegal, la contaminación por metales pesados, el tráfico ilegal de especies silvestres y otras prácticas frecuentemente asociadas a actividades ilegales o economías criminales. Estas actividades extractivas generan efectos directos sobre la disponibilidad y el estado de recursos naturales fundamentales como el agua, la tierra, los bosques, el aire y la flora y fauna silvestre, así como de infraestructura clave como carreteras, puentes, viviendas y sistemas de agua. La pérdida o deterioro de estos recursos e infraestructuras esenciales afecta negativamente la salud de las personas, la calidad de vida, las prácticas culturales ancestrales, la sostenibilidad de los medios de vida rurales y la seguridad alimentaria e hídrica de las personas más vulnerables, reduciendo la resiliencia del territorio y las comunidades locales.

Esta pérdida de resiliencia ha debilitado de manera significativa la capacidad del territorio y la comunidad para hacer frente a riesgos climáticos. En estos territorios, las presiones ambientales y climáticas han tenido impactos más severos y recurrentes debido al incremento sustantivo de la vulnerabilidad climática de la población, la infraestructura y los medios de vida. Por ejemplo, la deforestación y la tala ilegal ligada a la conflictividad territorial y el narcotráfico han exacerbado los procesos de degradación de la tierra y agravado las consecuencias de los periodos de sequía para la población local, incluyendo el acceso a agua para los hogares, los cultivos y el ganado. De esta forma, se ha configurado un riesgo más elevado frente a tormentas tropicales, inundaciones, deslizamientos y sequías, limitando las capacidades de adaptación y aumentando la exposición de las poblaciones más vulnerables frente a estos eventos climáticos extremos.

II. Los impactos climáticos sobre los medios de vida sensibles al clima han exacerbado conflictos sobre el acceso, uso y propiedad de los recursos naturales

La creciente variabilidad climática y el aumento en la frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos extremos ha afectado negativamente los medios de vida dependientes del clima de las poblaciones rurales como la agricultura, la ganadería, la minería, la pesca y la caza. Los fenómenos climáticos extremos como las incluidas lluvias extremas, tormentas tropicales, inundaciones, deslizamientos y sequías afectan en la disponibilidad, acceso y estado de los recursos naturales, impactando negativamente a diferentes sectores de la economía local que dependen de estos recursos.



Actividades como la agricultura y la pesca—históricamente esenciales para la subsistencia y la cultura de comunidades indígenas, afrodescendientes y rurales en Honduras— se han visto mermadas por el aumento de las temperaturas, las sequías prolongadas y huracanes como el Mitch (1998) y Eta-lota (2020), reduciendo la disponibilidad de recursos y agravando en algunos casos las tensiones y conflictos en torno a su uso y acceso. Estos impactos climáticos han acelerado la degradación de la tierra y disminuido la productividad agrícola, reduciendo la disponibilidad del agua, los bosques y la tierra fértil. Estos efectos se insertan en un contexto ya marcado por tensiones y disputas preexistentes en torno a dichos recursos entre distintos usuarios y actividades productivas —incluidas la agroindustria, los proyectos hidroeléctricos, la ganadería, la minería y el turismo—, profundizando los conflictos por el acceso y control del territorio. De manera similar, en comunidades costeras del Golfo de Fonseca y del Caribe hondureño, se ha reportado un aumento de agravios, tensiones y conflictos en torno a los recursos marinos cada vez más disminuidos, involucrando a diversos actores como pescadores artesanales, pescadores industriales, empresas camaroneras y guardacostas de países vecinos.

III. La violencia dentro de las comunidades y contra los defensores ambientales dificulta la implementación y efectividad de estrategias de acción climática

La violencia en las comunidades limita significativamente los espacios de diálogo y la participación de la población local, dificultando la puesta en marcha de estrategias colectivas de acción climática. Por un lado, las amenazas e intimidaciones dirigidas contra la población local, especialmente contra activistas sociales y defensores del medio ambiente, reducen la participación ciudadana por el miedo a represalias, erosionan los lazos comunitarios y desincentivan el involucramiento activo en asuntos públicos. La persistencia de homicidios, agresiones y delincuencia debilita las estructuras organizativas locales, frecuentemente a expensas de estructuras organizativas criminales al margen de la ley, además de desalentar la denuncia de irregularidades e inhibir la reivindicación de derechos y necesidades por miedo a represalias. Cuando esa base organizativa se fractura por efecto del miedo, también se erosionan los mecanismos de gobernanza ambiental necesarios para la acción climática, incluyendo aquellos que permiten gestionar el agua, conservar el bosque, gestionar las emergencias y planificar adecuadamente el uso del territorio, especialmente cuando estos requieren la interacción y coordinación entre múltiples actores e instituciones a distintos niveles.

Este clima de miedo e intimidación también tiene efectos directos sobre la actuación de instituciones públicas, iniciativa privada y organizaciones no gubernamentales. En algunos casos, las amenazas a funcionarios y personal

encargados de operar en el territorio dificultan su labor, reducen su presencia en campo y generan reticencia a ejercer plenamente sus funciones. Esto exacerba los vacíos de gobernanza existentes, debilita la capacidad institucional y facilita que actores al margen de la ley puedan ocupar esos espacios, al tiempo que permite que prácticas ambientales de alto riesgo continúen sin supervisión adecuada, incrementando la degradación de los recursos naturales y la vulnerabilidad de las comunidades locales. Por ejemplo, el control territorial ejercido por pandillas en los principales centros urbanos del país representa un gran desafío para la labor de diferentes instituciones durante situaciones de desastres y emergencia, al dificultar el acceso a determinados territorios y limitar la capacidad de brindar asistencia oportuna a la población afectada. En conjunto, estas dinámicas de violencia no solo deterioran la gobernanza local, sino que también obstaculizan la implementación y la efectividad de las estrategias de acción climática que dependen de instituciones sólidas, participación comunitaria y la cooperación efectiva en terreno de diferentes actores.

IV. Los impactos climáticos pueden agravar tensiones sociales y conflictividad mediante su impacto en los patrones de movilidad humana

La creciente variabilidad climática y la mayor intensidad y frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos han afectado negativamente la seguridad alimentaria, los medios de vida y las viviendas en Honduras, impulsando a personas, hogares y comunidades a migrar o desplazarse de forma temporal o definitiva. Estas dinámicas de movilidad humana se han consolidado como un mecanismo de adaptación clave para enfrentar la pérdida de ingresos, la reducción de la productividad agrícola y el acceso limitado a recursos naturales clave para la subsistencia. Sin embargo, estos patrones de movilidad, que incluyen rurales-rurales, urbanos-urbanos, rurales-urbanos y transnacionales, no solo responden a los impactos climáticos, sino que también interactúan con desigualdades estructurales, contextos de fragilidad institucional y niveles altos de violencia, configurando dinámicas de seguridad complejas en los territorios de origen, tránsito y destino.

En este contexto, la movilidad humana puede contribuir a la generación o intensificación de tensiones sociales, conflictos y violencia, particularmente cuando múltiples actores compiten por el acceso y control de los recursos disponibles o cuando los impactos climáticos y la movilidad humana asociada a estos genera una reconfiguración de los espacios y actores en conflicto. En las zonas de destino, el aumento de población puede poner presión sobre servicios básicos, infraestructuras y mercados laborales ya de por sí saturados, exacerbando condiciones de marginalización y desigualdad, así como exponiendo a las personas migrantes a riesgos de inseguridad presentes en los lugares de destino.



El desplazamiento de personas dentro ha contribuido a que estas pasen de enfrentar un riesgo climático a quedar expuestas a un riesgo de violencia, al reasentarse en zonas sujetas a control territorial por pandillas y grupos criminales. En otras ocasiones, el desplazamiento temporal por desastres ha generado conflictos y expuesto a personas a riesgos de violencia en los albergues temporales debido a la violencia de pandillas, generando nuevos desplazamientos y excluyendo a personas vulnerables de ayuda humanitaria y servicios básicos.

Asimismo, en lugares de tránsito, tanto urbanos como rurales, los migrantes pueden enfrentar riesgos de seguridad humana asociados a condiciones acceso limitado a servicios, casos de violencia e inseguridad, y exposición a fenómenos meteorológicos extremos. Por otro lado, quienes no se pueden permitir migrar —incluyendo poblaciones atrapadas en contextos de alta vulnerabilidad— enfrentan riesgos agravados como inseguridad alimentaria, endeudamiento y violencia, lo que también puede profundizar problemáticas sociales y agravios dentro de la población local.

V. El desplazamiento por violencia y conflictividad pueden agravar la vulnerabilidad climática

La violencia asociada al crimen organizado, las pandillas, el narcotráfico, la violencia de género y el acaparamiento de tierras han producido aproximado de 247.000 desplazados internos en Honduras (IDMC, 2023a). Estos desplazamientos ocurren en un contexto de fragilidad institucional, desigualdades estructurales y limitada presencia estatal, donde muchas personas se ven obligadas a abandonar sus hogares como estrategia de supervivencia. Las poblaciones desplazadas —particularmente mujeres, niños, personas LGBTI+ y comunidades rurales e indígenas— enfrentan condiciones de marginalización socioeconómica y riesgos agravados de seguridad humana en áreas de tránsito y destino, los cuales debilitan aún más sus capacidades de adaptación y respuesta ante riesgos climáticos.

En este contexto, el desplazamiento forzado, producto de la violencia y la conflictividad, incrementa la exposición y sensibilidad de las poblaciones a los impactos del cambio climático. Las comunidades desplazadas suelen reubicarse en zonas urbanas marginalizadas con infraestructura y vivienda precarias que, además, están altamente expuestas a inundaciones, deslizamientos y otros eventos extremos. Asimismo, la violencia y la conflictividad, presentes frecuentemente en los lugares de destino, debilitan la cohesión social y limitan la acción colectiva, dificultando la implementación de estrategias de adaptación y reducción de riesgo de desastres. La interrupción de procesos comunitarios, la limitada capacidad institucional en contextos violentos y las restricciones al accionar de organizaciones públicas y sociales reducen las posibilidades de construir resiliencia. Como resultado, el desplazamiento forzado contribuye a generar ciclos de vulnerabilidad en los que la exposición simultánea a violencia e impactos climáticos refuerza las condiciones de riesgo y limita las capacidades de respuesta de las comunidades afectadas.

VI. Las estrategias de acción climática pueden robustecer la resiliencia al tiempo que contribuyen a abordar la conflictividad y fortalecer la cohesión social

Las estrategias de acción climática, generalmente aunadas a esfuerzos de gestión ambiental y desarrollo rural, han emergido como mecanismos clave para fortalecer la resiliencia de las comunidades en Honduras frente a los impactos climáticos, al tiempo que generan espacios de articulación social y gobernanza territorial. En contextos marcados por conflictividad socioambiental y presiones sobre los recursos naturales, estas iniciativas no solo buscan responder a riesgos climáticos, sino también atender problemáticas estructurales relacionadas con el acceso a la tierra, el agua y los medios de vida. A través de la organización comunitaria, la creación de redes locales y la articulación con actores institucionales, estas estrategias permiten canalizar demandas colectivas y fortalecer capacidades locales para la gestión sostenible del territorio.

En este contexto, la acción climática puede desempeñar un papel relevante en la reducción de tensiones y la construcción de cohesión social, al promover objetivos compartidos y alternativas económicas sostenibles. Iniciativas como la gestión comunitaria de recursos naturales, la protección de fuentes de agua, la diversificación productiva y el fortalecimiento de medios de vida rurales contribuyen a disminuir la dependencia de actividades asociadas a la conflictividad, al tiempo que generan incentivos para la cooperación y el trabajo colectivo. Asimismo, los procesos participativos vinculados a estas estrategias —incluyendo la planificación territorial, la veeduría social y la formación técnica— fortalecen la confianza

entre actores, amplían los espacios de diálogo y refuerzan la capacidad de acción colectiva. De este modo, las estrategias de acción climática no solo incrementan la resiliencia frente a riesgos ambientales, sino que también pueden transformar dinámicas de conflicto en oportunidades para la construcción de territorios más cohesionados, inclusivos y en paz.

VII. Los fenómenos meteorológicos extremos y las capacidades limitadas de respuesta gubernamental pueden debilitar la gobernanza y la legitimidad política de las instituciones

Las estrategias de acción climática, particularmente aquellas relacionadas con la reducción del riesgo de desastres, evidencian que, cuando son limitadas, excluyentes o mal coordinadas, pueden profundizar las debilidades institucionales, erosionar la confianza pública y agravar tensiones sociales alrededor de la gobernanza local. En contextos como el hondureño, donde los fenómenos meteorológicos extremos son recurrentes, las respuestas que no incorporan las necesidades, conocimientos y prioridades de las comunidades locales tienden a reforzar percepciones de desigualdad, abandono estatal y falta de legitimidad de las instituciones. De esta manera, la distribución desigual de la ayuda, la planificación centralizada y la escasa participación local no solo reducen la efectividad de las intervenciones, sino que también pueden intensificar agravios preexistentes y debilitar las capacidades colectivas para enfrentar futuras crisis.

En este contexto, la ausencia de enfoques participativos y de base limita el potencial de las estrategias de acción climática para fortalecer la cohesión social y abordar la conflictividad. La falta de coordinación entre actores, la débil articulación institucional y la exclusión de ciertos grupos en los procesos de toma de decisiones dificultan la construcción de confianza y reducen los incentivos para la cooperación. Asimismo, cuando las intervenciones no logran atender las vulnerabilidades estructurales ni mejorar condiciones concretas de vida, pueden alimentar dinámicas de competencia por recursos, clientelismo y descontento social. De este modo, lejos de contribuir a la resiliencia, las estrategias de acción climática mal diseñadas o implementadas pueden reforzar contextos de fragilidad, debilitando la relación entre Estado y sociedad, y aumentando el riesgo de conflictividad.

VIII. Intervenciones de instituciones públicas y otros organismos pueden agravar, de forma no intencionada, la conflictividad sobre el acceso, el uso y la propiedad de los recursos

Diversas intervenciones impulsadas por instituciones públicas, organismos de cooperación y actores privados —orientadas a la acción climática y aunadas a esfuerzos de gestión ambiental y desarrollo rural— pueden generar efectos no

intencionados que agravan tensiones preexistentes o crean nuevos conflictos en torno al acceso, uso y control de recursos estratégicos como la tierra, el agua y los medios de vida. Estas situaciones suelen surgir cuando los procesos de diseño e implementación no incorporan un análisis adecuado de las dinámicas locales de conflictividad o no consideran las asimetrías de poder, los antecedentes históricos de despojo o las disputas territoriales existentes. Asimismo, la falta de consultas previas, libres e informadas, así como de mecanismos transparentes de participación y rendición de cuentas, puede debilitar la legitimidad de las intervenciones y generar percepciones de exclusión, desigualdad o incumplimiento entre distintos grupos comunitarios.

En este contexto, incluso iniciativas bienintencionadas pueden intensificar divisiones internas cuando los beneficios se perciben como distribuidos de manera desigual o cuando alteran dinámicas económicas y sociales existentes. De igual forma, acciones orientadas a la seguridad, la formalización de actividades económicas o la introducción de nuevas tecnologías pueden generar resistencias y disputas si la distribución de sus impactos no es adecuadamente considerada. La ausencia de acompañamiento técnico, seguimiento institucional o mecanismos de mediación también puede profundizar agravios entre beneficiarios y no beneficiarios. En conjunto, estas dinámicas evidencian que las intervenciones externas no operan en un vacío social, sino en territorios atravesados por relaciones de poder y conflictos latentes, por lo que integrar enfoques sensibles al conflicto y procesos participativos robustos resulta fundamental para evitar que acciones orientadas al desarrollo terminen agravando la conflictividad y debilitando la cohesión social y la gobernanza territorial.

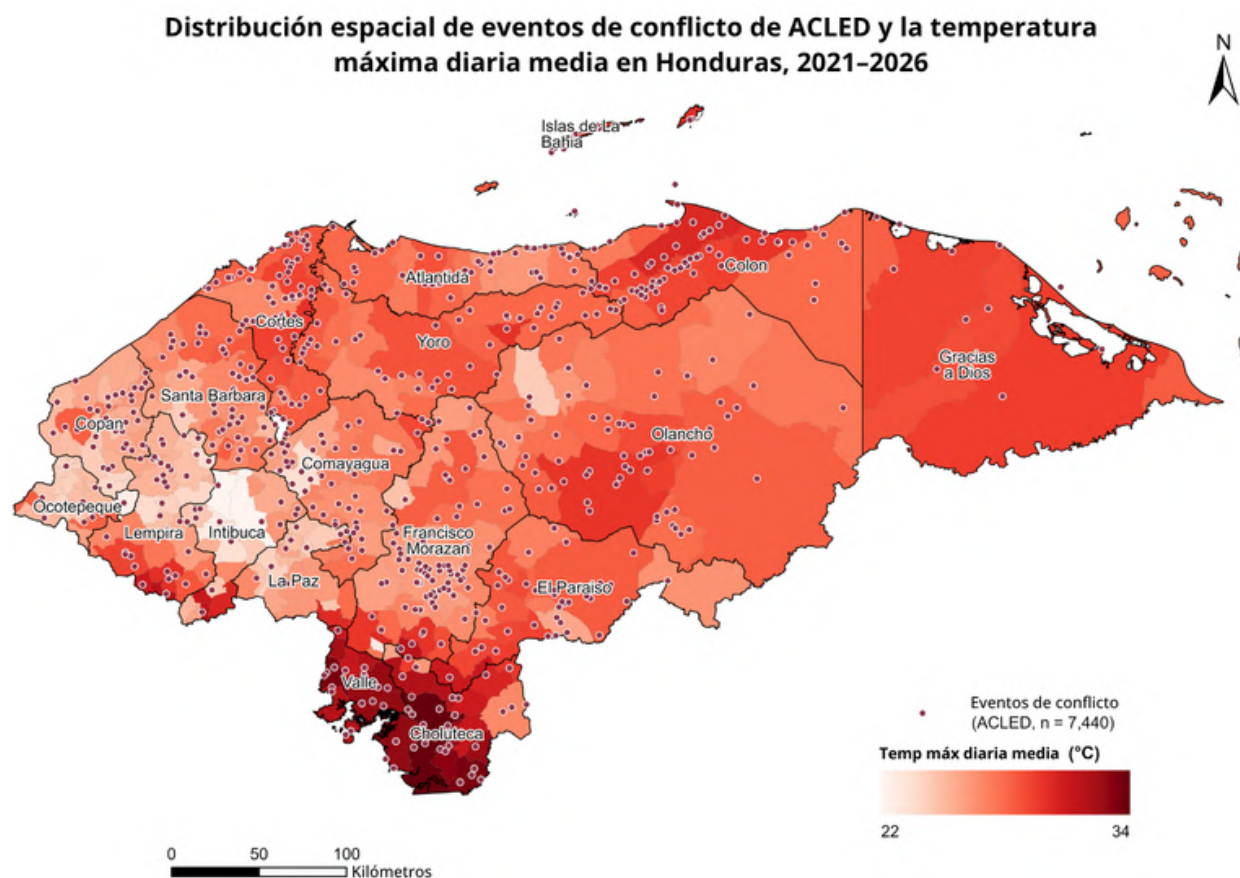


Fotografía: Julián Higuera-Florez - Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT.

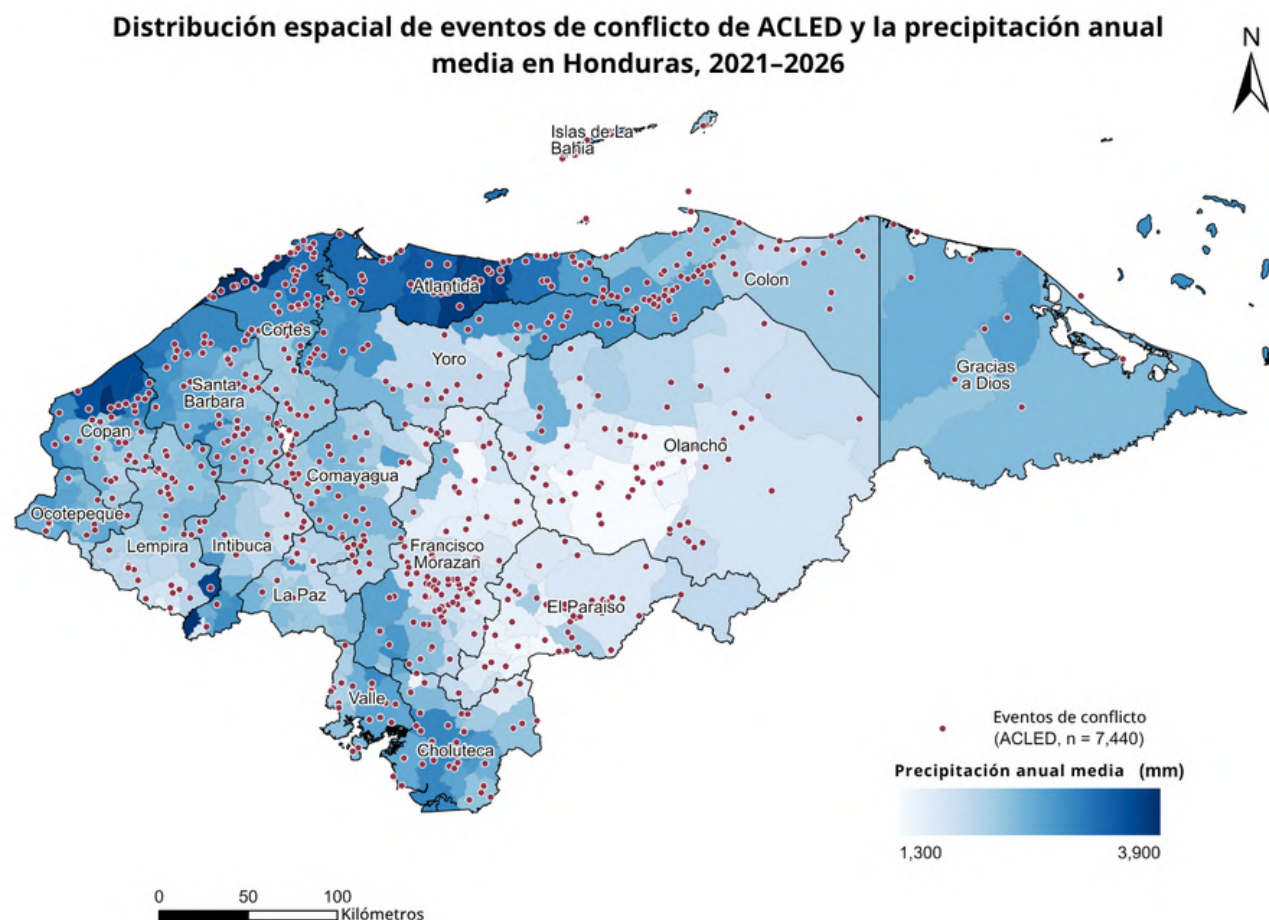
3. Puntos críticos de amenazas climáticas, conflicto y desplazamiento en Honduras

3.1. Puntos críticos de seguridad climática

La ocurrencia simultánea de riesgos climáticos y de seguridad configuran una doble vulnerabilidad para la población y un reto significativo para las personas y las instituciones encargadas de enfrentarlos. Por esta razón, resulta clave identificar cómo se distribuyen estos riesgos compuestos en el territorio hondureño y dónde se superponen. Para determinar estos puntos críticos de seguridad climática llevamos a cabo un análisis geoespacial donde superpusimos datos de conflicto con datos climáticos de lluvias y temperaturas extraídos de ERA5-Land generados por el Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo con una resolución espacial de $0.1^\circ \times 0.1^\circ$. El desempeño de estos datos ha sido previamente evaluado para Centro América y Honduras por varias investigaciones, incluido González-Méndez et al. (2025). Por un lado, la temperatura máxima diaria representa la temperatura máxima del aire cercana a la superficie sobre áreas terrestres. Por otro lado, la precipitación media anual se calcula como el promedio, entre los puntos de la cuadrícula, de la precipitación total anual y refleja el agua acumulada que alcanza la superficie.



Mapa 3: Distribución espacial de eventos de conflictos en Honduras (2021–2026) en superposición con la temperatura máxima promedio diaria entre 2021 y 2026. Elaboración propia con datos de ACLED y datos de ERA5-Land.

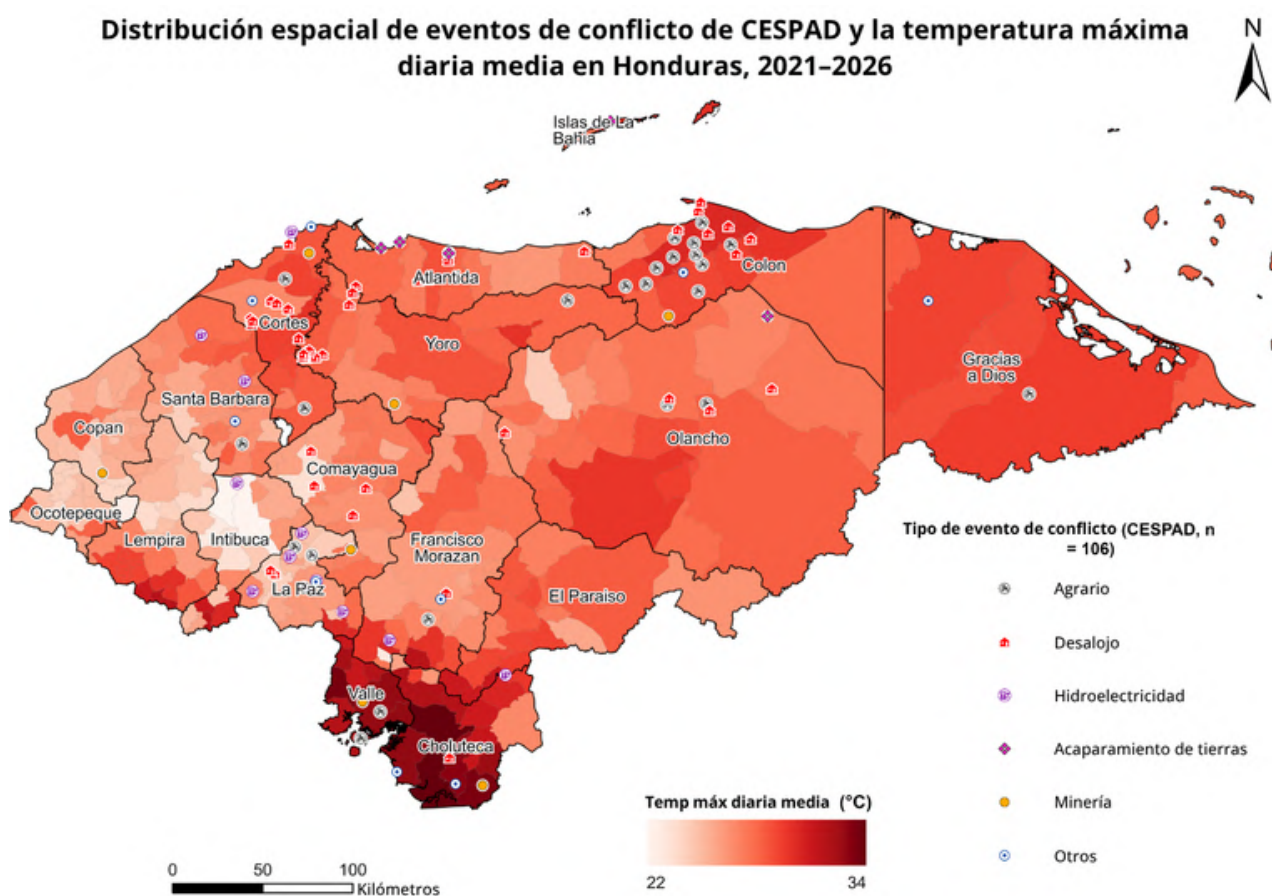


Mapa 4: Distribución espacial de eventos de conflictos en Honduras (2021–2026), en superposición con los datos de precipitación anual promedio entre 2021 y 2026. Elaboración propia con datos de ACLED y datos de ERA5-Land.

Los departamentos de El Paraíso, La Paz, Intibucá, Lempira y Francisco Morazán, junto con varios municipios de Valle, Choluteca, Yoro y Olanchó, registran niveles bajos de precipitación anual en comparación con el resto del país. En los departamentos de Choluteca y Valle, así como en el sur de El Paraíso, Francisco Morazán, Intibucá y Lempira, estos bajos niveles de precipitación se combinan con valores elevados de temperatura máxima diaria que, en algunos casos, alcanzan los 34 °C. Esta configuración coincide con la literatura existente, que identifica esta franja territorial como parte del Corredor Seco Centroamericano, caracterizado por condiciones de alta aridez, degradación de la tierra y deficiente gestión del recurso hídrico, mediados también por desigualdades preexistentes en la distribución y disponibilidad del recurso (Montes & Ayes Rivera, 2025).

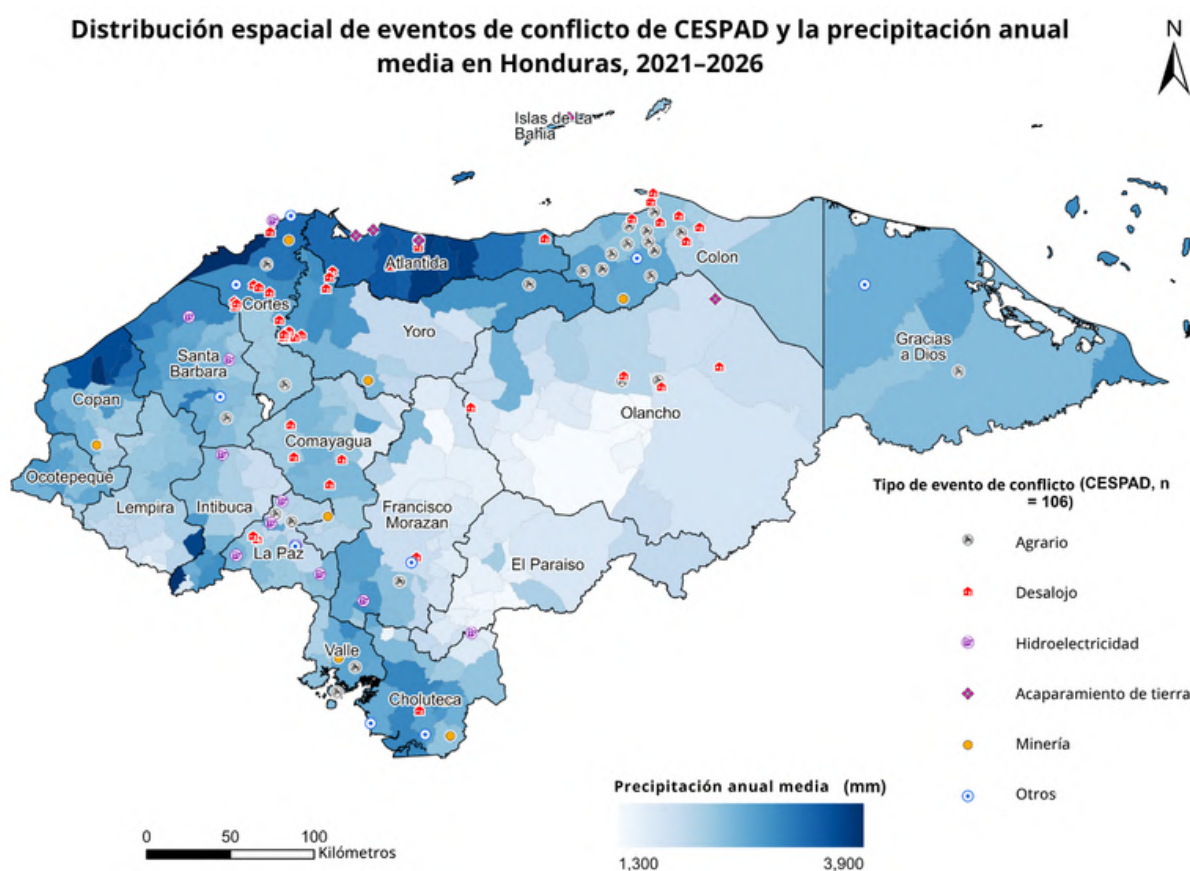
Por otra parte, en los departamentos del norte del país a lo largo de la costa Caribe como Atlántida, Colón, Cortés, Santa Bárbara, Copán y Gracias a Dios, así como unos pocos municipios de los departamentos de Intibucá, Valle y Choluteca, tienen unos altos niveles de precipitación media anual. Estos datos coinciden con la literatura existente, que identifica el caribe hondureño como una de las zonas más lluviosas del país y que, además, es la zona de entrada para ondas y ciclones tropicales provenientes del Océano Atlántico y frentes fríos

proveniente del norte. Esto se ha visto reflejado en huracanes devastadores como Fifi (1974), Mitch (1998), Eta e Iota (2020) y Julia (2022). Estos eventos suelen dejar víctimas mortales, así como cuantiosas pérdidas económicas debido a sus impactos en la infraestructura pública y privada, incluyendo viviendas, puentes, carreteras y cultivos (Montes & Ayes Rivera, 2025). Dichos impactos están mediados también por una inadecuada planificación territorial, la degradación ambiental de las cuencas hidrográficas, la debilidad de acciones preventivas y sistemas de alerta temprana, así como la vulnerabilidad socioeconómica de la población.



Mapa 5: Distribución espacial de conflictos socioambientales y territoriales en Honduras (1980-2026), según la base de datos de CESPAD, en superposición con la temperatura máximas promedio diaria entre 2021 y 2026. Elaboración propia.

Cuando superponemos los datos de conflicto de ACLED y CESPAD con la información de temperatura máxima diaria (mapas 4 y 6) y de precipitación media anual (mapas 3 y 5), se observa que una parte importante de los territorios afectados por conflicto también experimentan desafíos climáticos significativos. Estos territorios, identificados como puntos críticos de seguridad climática, enfrentan una doble vulnerabilidad que, según cómo se gestione, puede traducirse en oportunidades de cooperación para la gestión sostenible y compartida de los recursos naturales, o bien derivar en un “círculo vicioso” en el que los riesgos compuestos se refuercen mutuamente y amplifiquen sus efectos sobre las comunidades y las instituciones.



Mapa 6: Distribución espacial de conflictos socioambientales y territoriales en Honduras (1980–2026), según la base de datos de CESPAD, en superposición con los datos de precipitación anual promedio entre 2021 y 2026. Elaboración propia.

Potencialmente —si bien esto no se desprende de los mapas, los cuales no permiten establecer correlación ni causalidad— los cambios en el clima podrían contribuir a exacerbar la conflictividad y la violencia, especialmente aquella vinculada al uso y acceso a recursos naturales, mediante su impacto en factores intermedios como la seguridad alimentaria e hídrica, los medios de vida o las dinámicas de movilidad humana, tal y como describe la literatura científica recogida en la sección 3 de este documento (ver apartado II de la sección 2). Asimismo, en estos puntos críticos de seguridad climática, la presencia de conflictos y violencia podría dificultar la implementación y efectividad de estrategias de adaptación necesarias para hacer frente a estos cambios en el clima ya que, como indica el IPCC (2023), la conflictividad limita la capacidad de respuesta de las personas y las comunidades.

Algunos municipios que combinan altas temperaturas con escasas precipitaciones también documentan eventos de conflicto, tal como muestran los datos de ACLED. El aumento de las temperaturas y la variabilidad de las lluvias tienen un impacto directo sobre la tierra y el agua, lo que puede influir en conflictos socioambientales preexistentes relacionados con estos recursos, como los conflictos agrarios, hidroeléctricos y mineros, especialmente visibles según los datos de CESPAD en el departamento de La Paz y, en menor medida, en Choluteca, Valle y el sur de Francisco Morazán.

La introducción o la presencia de proyectos hidroeléctricos suele generar controversias en torno al acceso al recurso hídrico, lo cual puede crear o exacerbar agravios y tensiones entre comunidades, autoridades y empresas. Por ejemplo, el proyecto hidroeléctrico Puringla-Sazagua en la comunidad Sazagua ha generado tensiones entre la comunidad indígena Lenca y la Compañía Eléctrica Centroamericana entorno a la irregularidad en la adquisición de tierras y el impacto negativo que el desvío del Río Sazagua y la creación de la represa tuvo sobre el ecosistema local, los medios de vida y el acceso al agua de la comunidad (Maradiaga, 2024; CESPAD, 2024). La creciente variabilidad de las lluvias en departamentos del Corredor Seco como La Paz y las proyecciones existentes de reducción en la precipitación media anual podrían dificultar aún más el acceso al agua de la población local y agravar conflictos entorno a proyectos hidroeléctricos.

La introducción o presencia de proyectos de minería a gran escala tiende a generar, en muchas ocasiones, disputas en torno al acceso y uso de la tierra y el agua, así como conflictos vinculados a la distribución desigual de los beneficios y a los impactos negativos asociados a las actividades extractivas. Por ejemplo, la llegada de proyectos mineros al municipio de El Corpus como la Compañía Minera del Sur y la Compañía Cerros del Sur, generaron afectaciones en el acceso al agua de distintos sectores, agravando el problema preexistente de disponibilidad hídrica característico de un municipio del Corredor Seco (Higuera-Florez & Madurga-Lopez, 2026). Esto ha generado tensiones entre las poblaciones afectadas y las compañías mineras, las cuales necesitan agua para el lavado y procesamiento del material. Esto ha generado tensiones entre las poblaciones afectadas y las compañías mineras, las cuales también requieren de importantes cantidades de agua para las actividades de lavado y procesamiento del material.

Ante esta situación, los cambios históricos y anticipados en las precipitaciones en municipios del sur de Honduras plantean un reto adicional en contextos afectados por conflictividad minera, donde esta doble vulnerabilidad puede agravarse mutuamente. No obstante, la coocurrencia de estos riesgos compuestos también puede abrir oportunidades de cooperación en las que la acción climática contribuya a fortalecer el diálogo y la colaboración entre actores.

Algunos de los municipios con mayores tasas de precipitación media anual están también entre aquellos con más eventos de conflicto según los datos de ACLED. Entre estos municipios destacan algunas de las principales ciudades del país como San Pedro Sula, Choloma, Tela, La Ceiba y Puerto Cortés, donde los eventos de conflicto están principalmente asociados con

la violencia de maras y pandillas. Estas dinámicas de violencia urbana están asociadas a altos índices de homicidios, extorsiones y crímenes violentos, lo cual ha contribuido a que Honduras figure entre los tres países con menor nivel de paz de Centroamérica y el Caribe (IEP, 2022). En estos municipios, tal y como muestra el mapa 4 y confirma la literatura (ver apartado III y IV de la sección 3), coinciden altos niveles de violencia con altos niveles de precipitación, superponiendo dos riesgos que pueden exacerbase mutuamente.

La presencia de violencia en estos puntos críticos podría dificultar la implementación y efectividad de estrategias de adaptación y reducción de riesgo de desastres necesarias para hacer frente a las tormentas tropicales, así como las acciones de repuesta ante emergencias y atención de desastres. La coordinación interinstitucional y la acción colectiva necesarias se ven condicionadas por la violencia, limitando la capacidad de respuesta de la población y las instituciones (IPCC, 2023; Wyngaarden et al., 2022).

De manera análoga, el exceso de precipitaciones proyectado para estas regiones podría exacerbar conflictos socioambientales existentes vinculados al uso y acceso a recursos naturales, si estos riesgos compuestos no se abordan desde la cooperación. El aumento en la intensidad de las precipitaciones tiene un impacto directo sobre el territorio, destruyendo viviendas, infraestructura pública y cultivos, y generando el desplazamiento de miles de personas. Esto puede influir en conflictos socioambientales preexistentes relacionados con la propiedad, acceso y uso de la tierra como los conflictos agrarios y los desalojos, especialmente visibles según los datos de CESPAD en los valles del Sula y del Aguán en los departamentos de Atlántida, Cortés, Yoro y Atlántida.

En estos puntos críticos de conflictividad socioambiental la coexistencia de intereses contrapuestos en torno a la propiedad, el uso y el acceso a la tierra, junto con una institucionalidad frágil, una limitada aplicación de la ley y profundas desigualdades socioeconómicas suele derivar en disputas territoriales que, a su vez, frecuentemente reducen la resiliencia comunitaria y las capacidades locales para responder a eventos climáticos extremos. Un ejemplo ilustrativo identificado por CESPAD es el caso de la Sierra del Merendón, situada en las afueras de Choloma, donde persiste un conflicto agrario con altos niveles de precipitación (mapa 6). El conflicto está asociado a los distintos usos que diversos actores hacen del área protegida, incluyendo la tala, la caza y la minería ilegal, la deforestación acelerada para el establecimiento de sistemas agropecuarios, así como la introducción de proyectos hidroeléctricos y urbanísticos.

La convergencia de múltiples actores, intereses y usos de los recursos naturales dentro del área protegida ha generado conflictos que se han exacerbado por el crecimiento poblacional, la reducida presencia institucional y un insuficiente cumplimiento normativo. Estas dinámicas han provocado una marcada degradación ambiental y la destrucción del ecosistema local, afectando a las comunidades dentro y alrededor de la zona, comprometiendo el abastecimiento de agua de ciudades aledañas — incluyendo San Pedro Sula— y aumentando su vulnerabilidad frente al cambio climático, especialmente ante derrumbes surgidos a raíz de lluvias intensas que dañan viviendas, bloquean las vías de comunicación, destruyen medios de vida, dañan la infraestructura de abastecimiento y disminuyen la calidad del agua. Esto, a su vez, agrava las tensiones internas dentro de las comunidades —tanto entre los distintos usuarios del territorio como frente a quienes están involucrados en su degradación— y da lugar a un aumento de las demandas y reclamos dirigidos a la municipalidad y a otras instituciones competentes (Padilla et al. 2024).

Otro ejemplo de ello son los conflictos territoriales que afectan a comunidades garífuna en la costa norte de Honduras, identificados por los datos de CESPAD en los departamentos de Colón y Atlántida. Los movimientos garífunas por la defensa de la tierra han estado marcados por tensiones históricas con el Estado y actores privados debido a disputas sobre la propiedad colectiva de territorios ancestrales, procesos de despojo y expansión de actividades económicas sobre sus territorios (Bellamy et al., 2023). La variabilidad en las precipitaciones en esta región puede agravar las tensiones preexistentes, aumentando la presión sobre los territorios históricamente en disputa, así como dificultando procesos de diálogo o resolución de conflictos. Estas dinámicas afectan especialmente a las comunidades garífuna, que presentan una alta vulnerabilidad al cambio climático debido a su fuerte dependencia de los recursos naturales para sus medios de vida y su seguridad alimentaria.

Por último, el caso de la comunidad de Chapagua, en el municipio de Trujillo, departamento de Colón, es otro punto crítico de seguridad climática (ver Mapa 6) y un caso ilustrativo de cómo los fenómenos climáticos pueden interactuar con conflictos socioambientales. En esta comunidad, mapeada en la base de datos CESPAD, la alteración del cauce natural del río Aguán para favorecer plantaciones de palma aceitera ha incrementado significativamente la exposición de la población a inundaciones recurrentes, deteriorando viviendas, infraestructura comunitaria y medios de vida. Las lluvias intensas y el desbordamiento del río han agravado progresivamente esta situación, al punto de que muchas familias consideran actualmente la reubicación planificada como la única solución viable (Madurga-Lopez et al., 2025). En 2024, las fuertes lluvias

provocaron nuevamente el desbordamiento del río Aguán, arrasando gran parte del cementerio de la comunidad y afectando decenas de tumbas, mientras la población denunciaba años de abandono institucional y señalaba el desvío del río para actividades agroindustriales como una de las causas de la emergencia.

Este caso evidencia cómo la combinación entre la transformación del territorio generada por las actividades extractivas y sus disputas asociadas junto con la consecución de eventos climáticos extremos produce riesgos compuestos que profundizan la vulnerabilidad de la población. No obstante, dicha vulnerabilidad está principalmente determinada por factores no climáticos ligados al contexto de conflictividad socioambiental y extractivismo que determinan la exposición y la capacidad de respuesta que tienen las personas. En este contexto, los altos niveles de precipitación a lo largo de los municipios por donde pasa el río Aguán (ver mapa 6) contribuyen a crecidas recurrentes del río determinadas por su geomorfología y pequeña cuenca, así como por los procesos acelerados de deforestación y daños en el suelo que no permiten que la tierra infiltre el agua y retrasen los tiempos de crecida y sus impactos. En el caso de Chapagua, las crecidas del río tras la alteración de su cauce natural han generado enormes daños materiales e intensificado tensiones preexistentes relacionadas con el acceso, manejo y control del territorio, dificultando las capacidades de adaptación y respuesta de la comunidad.



3.2 Puntos críticos de desplazamiento por desastres y conflicto

En Honduras, los impactos climáticos y la violencia convergen para producir dinámicas de desplazamiento interno particularmente complejas. Los fenómenos climáticos extremos, como ciclones tropicales, sequías e inundaciones, han generado más de 1.1 millones de desplazamientos en las últimas décadas (IDMC, 2023b), pero estos procesos no ocurren en un vacío: se insertan en un contexto marcado por altos niveles de violencia, inseguridad, desigualdad socioeconómica y fragilidad institucional. El resultado es una interacción en la que los impactos atribuidos a fenómenos meteorológicos intensifican riesgos de seguridad humana que fuerzan los desplazamientos, mientras que la violencia y la inseguridad debilitan la resiliencia comunitaria frente a los desastres. A esta situación se suma la creciente exposición y vulnerabilidad a impactos climáticos a los que se enfrentan los desplazados internos en el país, sin importar la razón principal del desplazamiento.

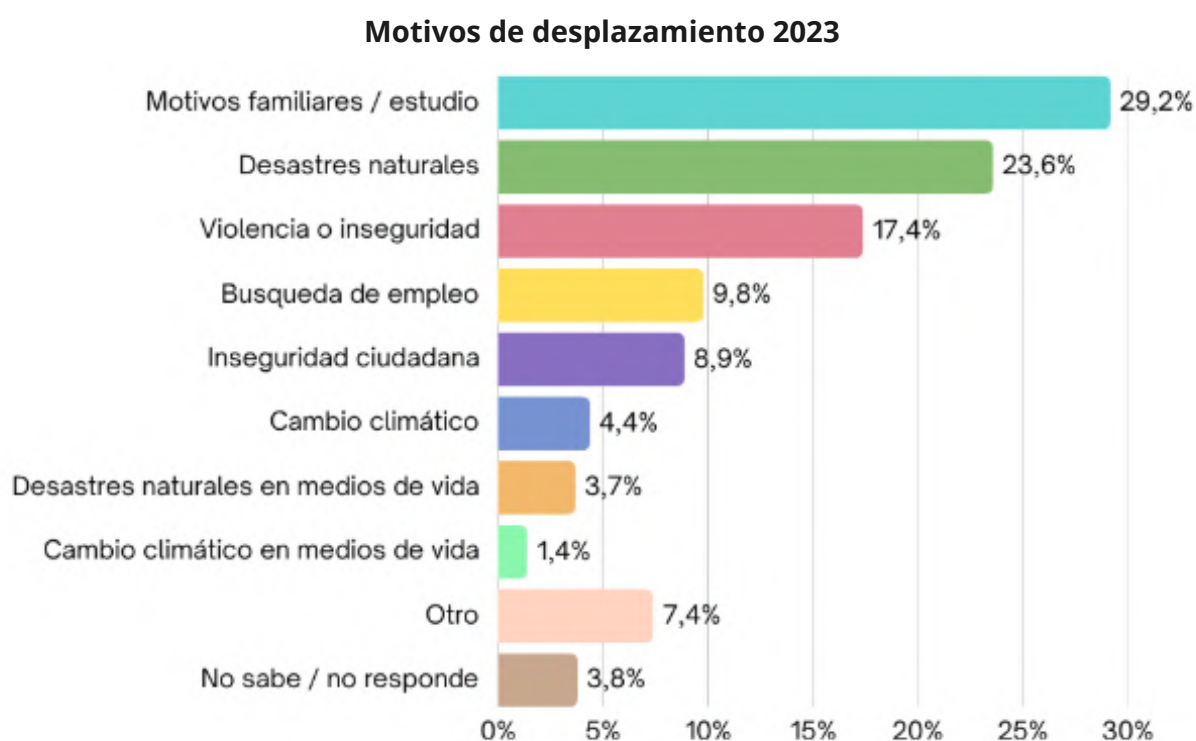


Gráfico 5: Motivos de Desplazamiento según la ENMR 2023, Fuente: elaboración propia en base a la Encuesta Nacional de Migración y Remesas, 2023, extraída de <https://ine.gob.hn/bases-de-datos/>

Los datos recientes de desplazamiento recogidos en Honduras muestran que los desastres y cambio climático son factores determinantes asociados al desplazamiento interno. Según la Encuesta Nacional de Migración y Remesas (ENMR, 2023) el 33.1% de las personas respondieron haberse desplazado por desastres o cambio climático (Gráfico 5). En cuanto en la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM, 2024), el 39% de las

personas desplazadas reporta haberlo hecho a causa de desastres, seguido por la inseguridad y la violencia (Gráfico 6). Estos datos evidencian el impacto que los riesgos compuestos de inseguridad e impactos climáticos tienen sobre las dinámicas de desplazamiento en el país, las cuales varían ampliamente a lo largo del territorio hondureño y entre distintos grupos sociales.

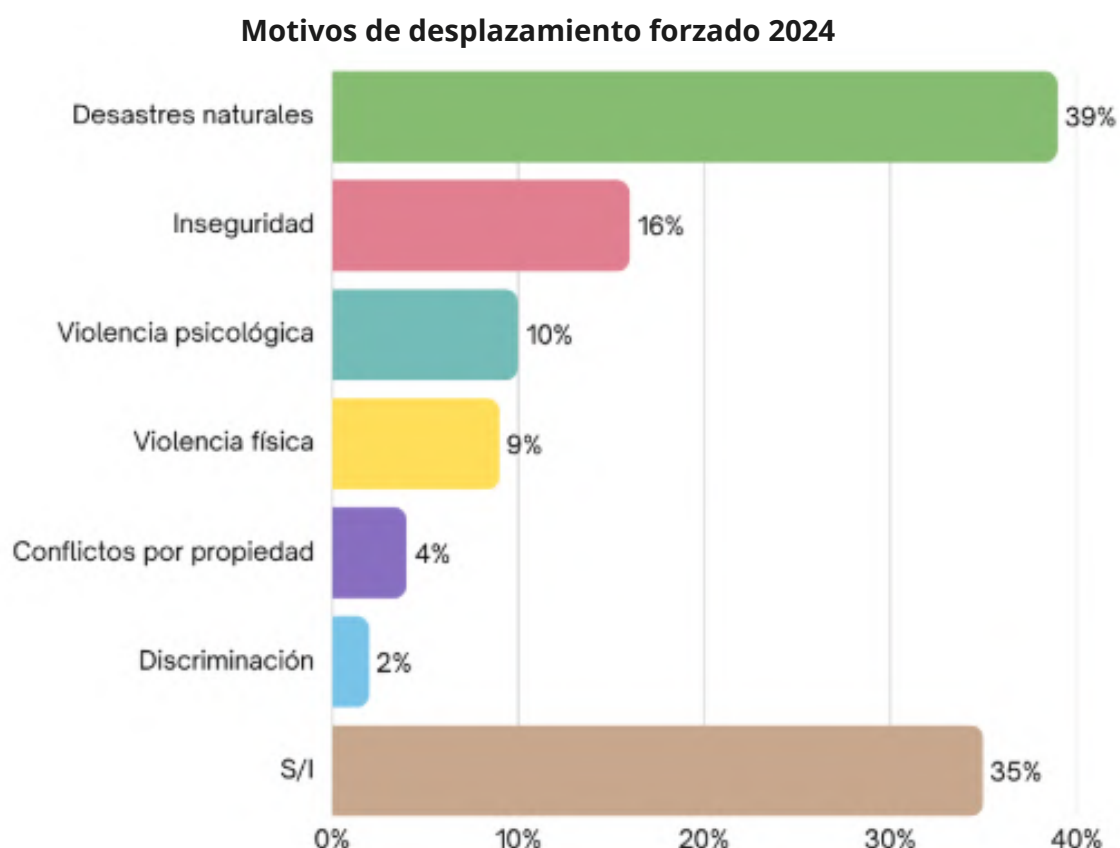


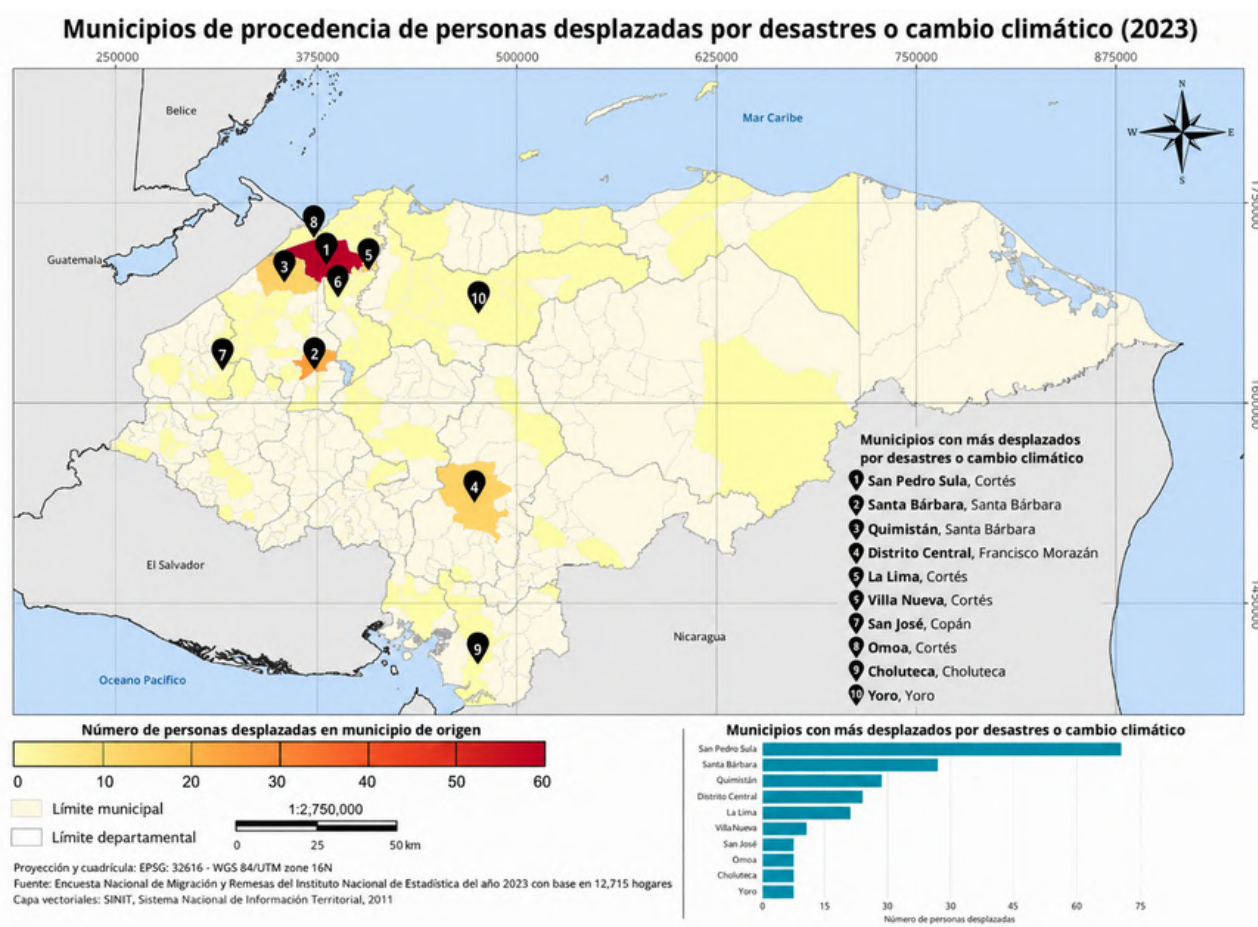
Gráfico 6: Motivos de Desplazamiento forzado según la EPHPM 2024. Fuente: elaboración propia en base a la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples, 2024, extraída de <https://ine.gob.hn/bases-de-datos/>

El desplazamiento de zonas rurales u otras áreas afectadas por el cambio climático o desastres en Honduras tiende a concentrarse en los principales centros urbanos, donde se intensifican vulnerabilidades estructurales preexistentes vinculadas a la criminalidad, la precariedad en la prestación de servicios básicos y la fragmentación de la cohesión social. Este proceso genera, con frecuencia, una transición entre distintos tipos de vulnerabilidades y riesgos: de la inseguridad ambiental y económica que caracteriza a los territorios rurales hacia la inseguridad social, laboral y física que predomina en los contextos urbanos.

En numerosos casos, esta dinámica adopta la forma de una migración o movimiento en dos etapas, en la que los hogares primero se desplazan hacia las ciudades en busca de oportunidades económicas o protección frente a los impactos climáticos y, posteriormente, enfrentan condiciones

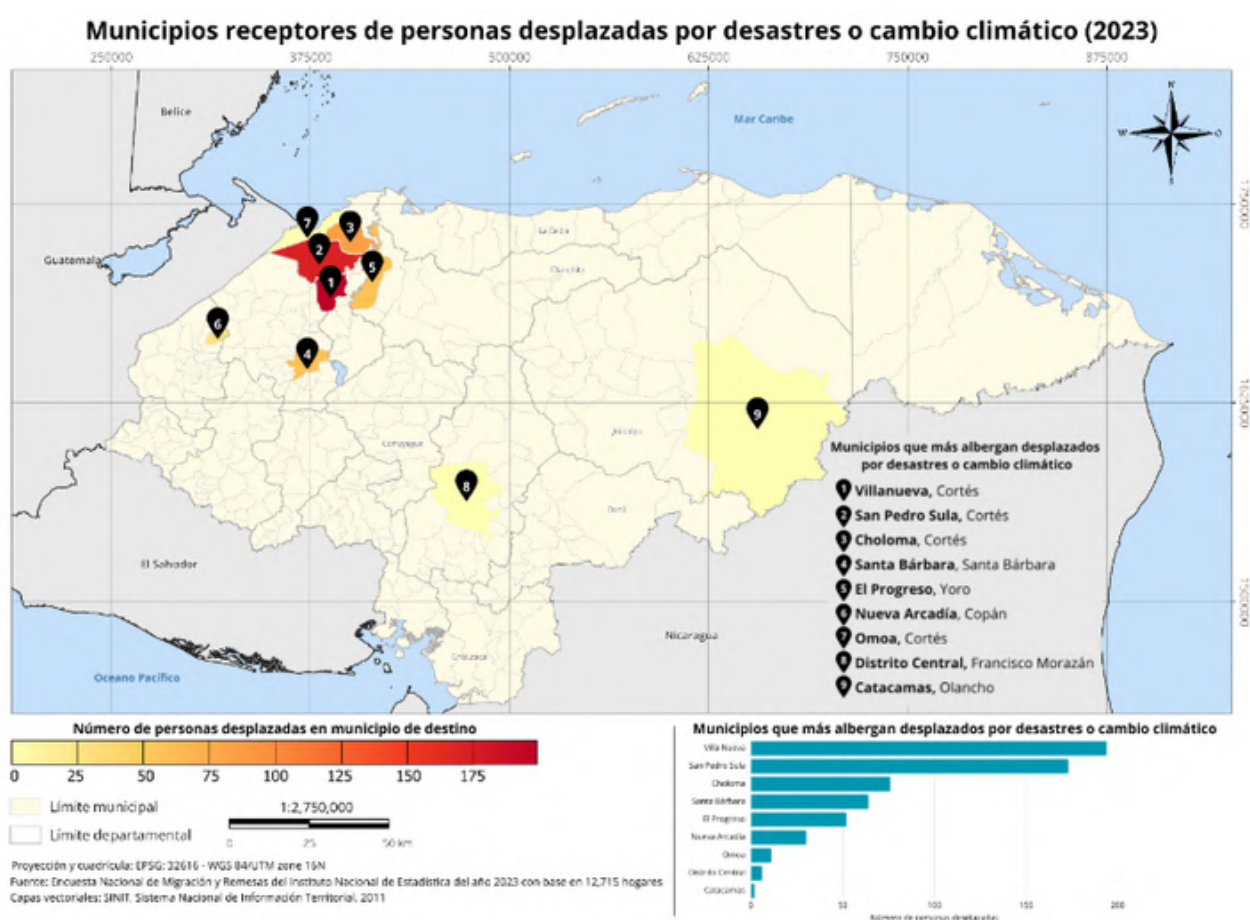
de exclusión informalidad o violencia que los impulsan a considerar la migración internacional como una estrategia de supervivencia. Si bien el origen de estos desplazamientos se distribuye a lo largo del territorio nacional, el destino tiende a concentrarse en nueve centros urbanos que actúan como principales polos de atracción y tránsito para las poblaciones afectadas (IDMC, 2023b).

La zona norte de la costa Atlántica y el área del Valle de Sula, donde se concentran muchas de las ciudades más pobladas del país, son las más afectadas por desplazamiento por desastres o cambio climático (ver mapa 7). Entre los municipios con mayor número de personas desplazadas por estas causas destacan San Pedro Sula, Santa Bárbara, Quimistán, el Distrito Central, La Lima y Villanueva; todos, excepto el Distrito Central, se ubican precisamente en estas zonas del norte del país, caracterizadas por una alta densidad poblacional y concentración de actividades económicas. Estos resultados evidencian cómo los desastres afectan de manera particular a áreas densamente pobladas y económicamente dinámicas, incrementando tanto el impacto social como la exposición al riesgo.



Mapa 7: Municipios de procedencia de las personas desplazadas por desastres o cambio climático. Elaboración propia con datos de la ENMR (2023) del INE.

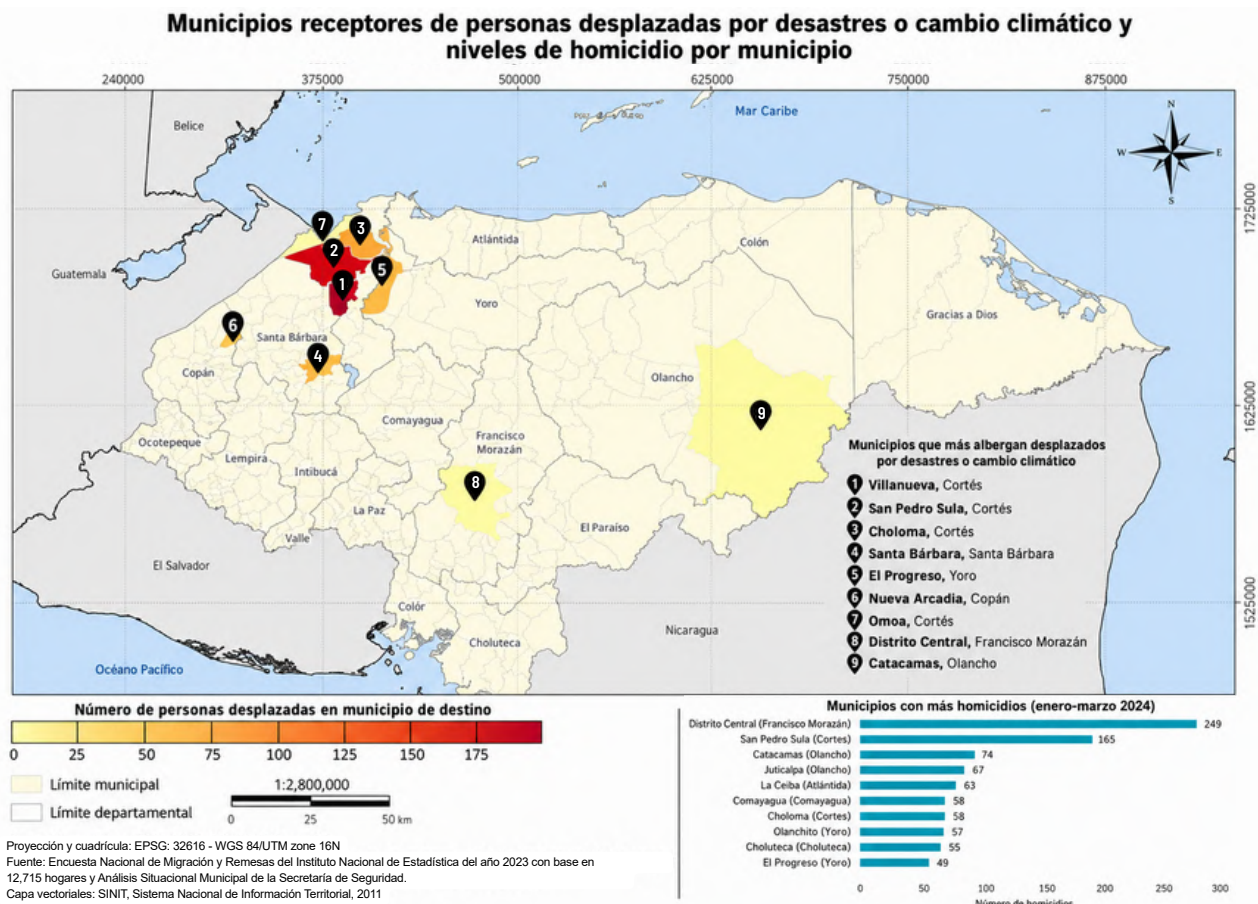
Los principales municipios de destino de personas desplazadas por desastres (ver Mapa 8) muestran un notable solapamiento con los lugares de origen, lo que indica patrones de movilidad predominantemente circulares o de corta distancia, caracterizados por reubicaciones dentro del mismo departamento o región. Esta tendencia sugiere que las personas desplazadas optan por estrategias que preservan la cercanía con sus redes familiares y con los medios de vida previos. Entre los municipios que reciben mayor afluencia de población desplazada por desastres se encuentran San Pedro Sula, Santa Bárbara, Quimistán, el Distrito Central, La Lima y Villanueva, lo que evidencia la concentración de estos flujos en zonas ya altamente afectadas por eventos climáticos, pudiendo generar nuevos casos de desplazamiento.



Mapa 8: Municipios receptores de personas desplazadas por desastres o cambio climático. Elaboración propia con datos de la ENMR (2023) del INE

Las zonas con mayor recepción de población desplazada (ver Mapa 9) coinciden con los municipios que registran los niveles más altos de violencia homicida, especialmente en el Valle de Sula, donde se concentran municipios con fuerte presencia de maras y pandillas. Esta superposición sugiere que las personas desplazadas por causas climáticas enfrentan una doble exposición: a los impactos del cambio climático y los desastres, y a contextos de inseguridad urbana y violencia, lo que limita

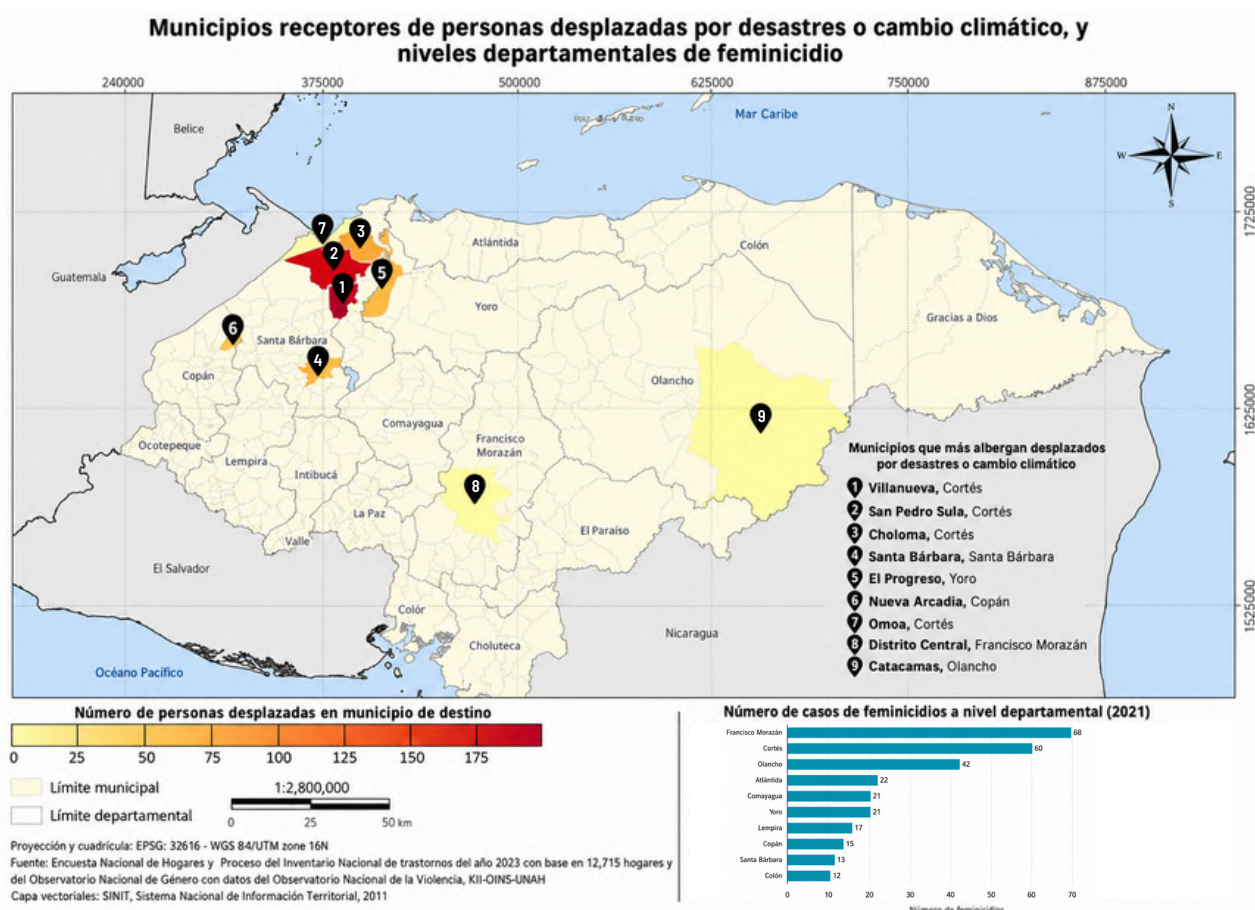
significativamente sus capacidades de adaptación y resiliencia. Entre los municipios con mayor número de homicidios se encuentran el Distrito Central, San Pedro Sula, Choluteca, Juticalpa, La Ceiba y Catacamas. De estos, el Distrito Central y San Pedro Sula, las dos principales ciudades del país, también figuran entre los principales municipios receptores de población desplazada por cambio climático y desastres, evidenciando como las personas desplazadas frecuentemente transitan de un contexto de riesgo a otro, pasando en este caso de riesgos climáticos a riesgos de violencia. Asimismo, esto refleja como en ambas ciudades existe una convergencia territorial entre las dinámicas de expulsión y llegada de personas desplazadas por desastres y cambio climático con fenómenos de violencia e inseguridad urbana, generando riesgos compuestos para las personas más vulnerables.



Mapa 9: Municipios receptores de personas desplazadas por desastres o cambio climático y niveles de homicidios por municipio. Elaboración propia con datos de la ENMR (2023) del INE y el Análisis Situacional Municipal de la Secretaría de Seguridad.

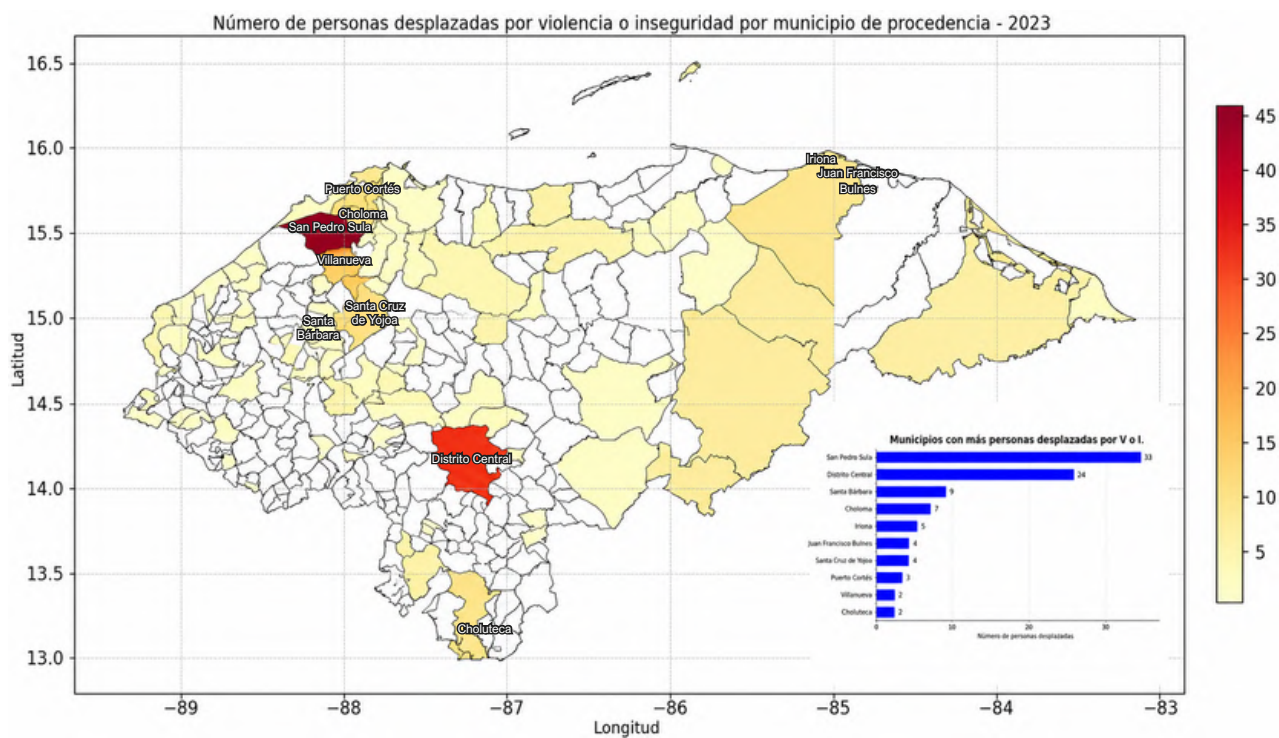
De igual manera, las mujeres y niñas desplazadas por cambio climático y desastres enfrentan riesgos asociados a la violencia basada en género en sus lugares de destino. Los departamentos con mayores tasas de feminicidio (ver mapa 10), entre ellos Cortés, Atlántida y Francisco Morazán, también concentran altos niveles de desplazamiento por cambio

climático y desastres, lo que revela una dimensión de género en las vulnerabilidades asociadas al desplazamiento y la persistencia de riesgos superpuestos para las mujeres desplazadas.

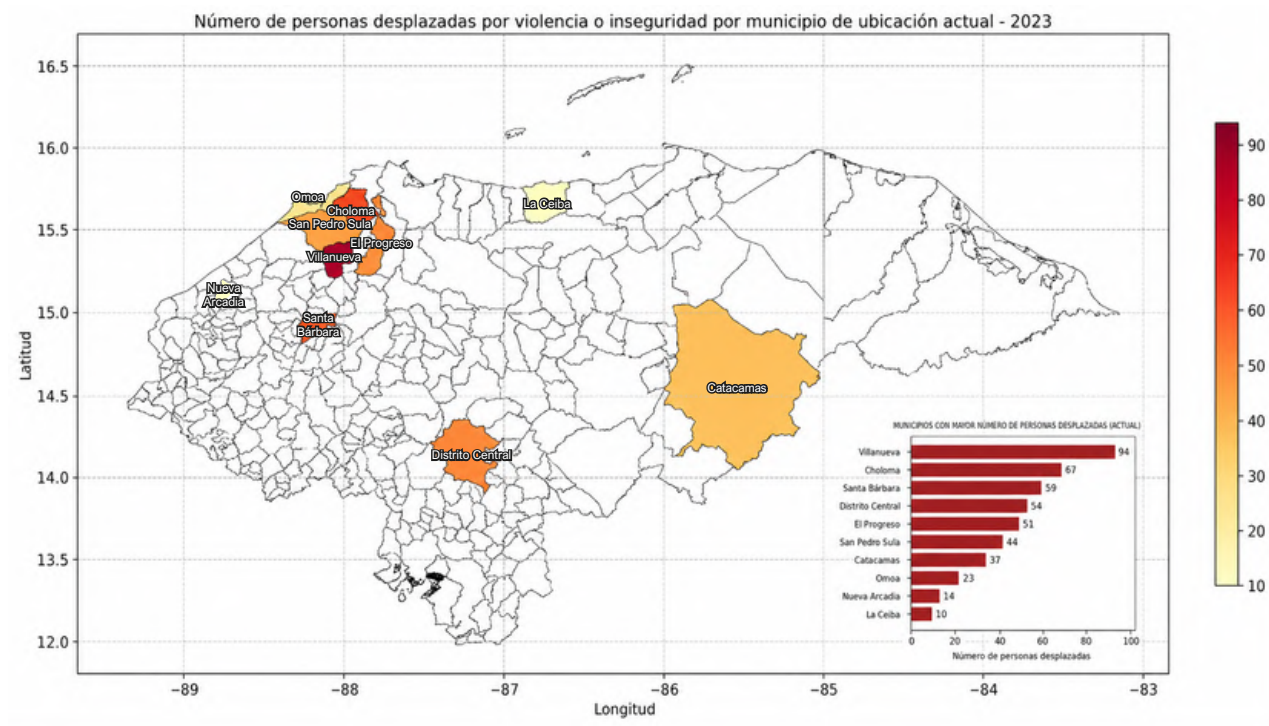


Mapa 10: Municipios receptores de personas desplazadas por desastres o cambio climático y niveles departamentales de feminicidios. Elaboración propia con datos de la ENMR (2023) del INE y del Observatorio Nacional de Género con datos del Observatorio Nacional de Violencia.

Los principales municipios de origen de personas desplazadas por violencia e inseguridad se concentran en la zona del Valle de Sula, particularmente en los departamentos de Cortés y Santa Bárbara. Entre los municipios con mayor número de personas desplazadas destacan San Pedro Sula, el Distrito Central, Santa Bárbara, Choloma, Iriona, Juan Francisco Bulnes, Santa Cruz de Yojoa, Puerto Cortés y Villanueva, muchos de los cuales se ubican precisamente en los departamentos de Cortés y Santa Bárbara (ver mapa 11). Estos desplazamientos suelen estar asociados a contextos de violencia, amenazas y coerción ejercidas por pandillas y organizaciones criminales, reflejando la persistencia de entornos de alta inseguridad en zonas urbanas y periurbanas del norte del país.



Mapa 11: Número de personas desplazadas por violencia o inseguridad por municipio de procedencia. Fuente: Elaboración propia con datos de la ENMR (2023) del INE.



Mapa 12: Número de personas desplazadas por violencia o inseguridad por municipio de ubicación actual. Fuente: Elaboración propia con datos de la ENMR (2023) del INE

Los principales municipios de destino de personas desplazadas por violencia o inseguridad se concentran en el norte del país y en el Valle de Sula. Entre los municipios que reciben el mayor número de personas desplazadas destacan Villanueva, Choloma, Santa Bárbara, el Distrito Central, El Progreso y San Pedro Sula (ver mapa 12). Esta concentración territorial sugiere patrones de desplazamiento hacia centros urbanos y zonas con mayor actividad económica, donde las personas desplazadas buscan redes de apoyo, oportunidades de subsistencia y mayores condiciones de seguridad. También se observa un alto grado de solapamiento entre los lugares de expulsión y de destino, lo que indica que en muchos casos existen patrones de movilidad predominantemente circulares o de corta distancia, caracterizados por reubicaciones dentro del mismo departamento o región. Muchas de las ciudades receptoras de personas desplazadas por violencia o inseguridad figuran también entre las más afectadas por desplazamiento por desastres o cambio climático, lo que revela cómo las personas desplazadas con frecuencia transitan de un contexto de riesgo a otro, pasando en este caso de riesgos de violencia a riesgos climáticos que pueden generar nuevos ciclos de desplazamiento.

En conclusión, los desplazamientos provocados por fenómenos climáticos y geofísicos pueden, condicionados por diferentes niveles de resiliencia y capacidades institucionales, exacerbar las tensiones sociales, empoderar a grupos criminales y agravar diferentes tipos de violencia, incluidos homicidios y violencia de género, especialmente contra las mismas personas desplazadas. Al mismo tiempo, los desplazamientos provocados por violencia y conflicto pueden debilitar la resiliencia, la cohesión social y la capacidad de acción colectiva y respuesta de las comunidades, dificultando la implementación y efectividad de las estrategias de adaptación al cambio climático, la reducción de riesgo de desastres y la gestión de emergencias.





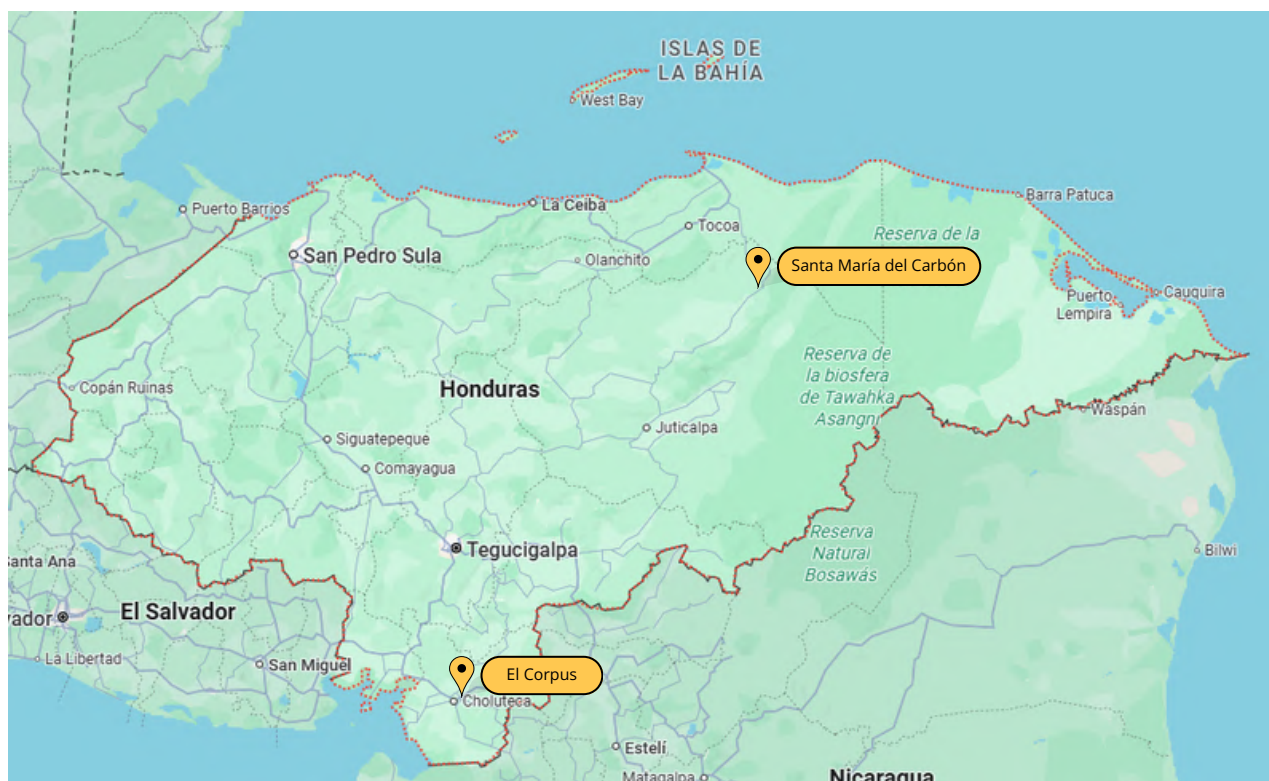
4. Esfuerzos, soluciones y recomendaciones para Honduras

4.1. Acción climática sensible al conflicto y construcción de paz medioambiental

La incorporación de análisis de conflicto en la acción climática en Honduras ha implicado reconocer que las intervenciones de adaptación y mitigación interactúan con dinámicas sociales complejas, especialmente en territorios afectados por conflictividad y violencia. En territorios con alta vulnerabilidad climática, estas acciones no son neutras, sino que pueden incidir en relaciones de poder, en el acceso a los recursos y en tensiones preexistentes. En respuesta a ello, se han planteado objetivos e impulsado procesos orientados a integrar esta sensibilidad en el diseño e implementación de intervenciones lideradas por instituciones como la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y el Instituto de Conservación Forestal (ICF), promoviendo enfoques más informados, participativos y adaptados a las realidades locales. Estos esfuerzos no solo buscan evitar impactos negativos no intencionados, sino también fortalecer condiciones de paz positiva, abordando factores estructurales de conflicto y promoviendo relaciones de cooperación más equitativas en torno al uso y gobernanza de los recursos, el línea con el enfoque de construcción de paz medioambiental, el cual plantea fortalecer la cooperación, la cohesión social y la gobernanza territorial a través de la gestión sostenible e inclusiva de los recursos naturales y de las respuestas al cambio climático.

En este marco, se desarrollaron estudios de caso en dos comunidades: [*El Corpus*](#) y [*El Carbón*](#), donde convergen múltiples iniciativas de gestión ambiental, desarrollo rural y acción climática. La selección de estos territorios respondió al desarrollo en curso de ciertas intervenciones impulsadas por actores gubernamentales y por la cooperación internacional, como el Programa Padre Andrés Tamayo y el programa PlanetGOLD. Asimismo, instituciones como SERNA y otros socios recomendaron y solicitaron enfocar esfuerzos en estas zonas, dada el interés de generar evidencia que informe instrumentos de política pública como el Plan Nacional de Adaptación (NAP). A partir del trabajo de campo, se logró caracterizar dinámicas de conflictividad socioambiental, identificar actores clave, analizar disputas por el acceso a recursos y visibilizar formas locales de organización y cooperación, aportando insumos concretos para ajustar intervenciones y mejorar su implementación en territorio.

Mapa de Santa María del Carbón y El Corpus



Mapa 13: Ubicación geográfica de la aldea Santa María del Carbón y el municipio de El Corpus en Honduras. Fuente: Adaptado de Google Maps.

Estos avances se articulan con procesos más amplios de fortalecimiento de marcos de política pública. En particular, las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDCs) 3.0 incorporan en la de la sección de *Gobernanza inclusiva y participación ciudadana* del eje de Transversales, la acción estratégica 2: “Desarrollo y generación de información que oriente la adaptación sensible al conflicto”. Esta acción resalta la necesidad de desarrollar herramientas que orienten una adaptación sensible al conflicto, reconociendo la importancia de considerar dinámicas sociales, territoriales, culturales y políticas en la planificación climática. Esto se traduce en la promoción de metodologías para identificar riesgos socioambientales, comprender relaciones de poder, incorporar enfoques de género, interculturalidad y derechos humanos, y fortalecer la coordinación interinstitucional. Al mismo tiempo, se refuerza la necesidad de que estas herramientas contribuyan a mejorar la legitimidad política de la acción climática, a través de mayores niveles de transparencia, rendición de cuentas y representación, así como mediante la participación activa de actores locales en la toma de decisiones y en la asignación de recursos para la resiliencia.

De manera complementaria, los espacios de diálogo interinstitucional, como las consultas para el desarrollo de la política de protección social adaptativa y los casos de estudio de El Corpus y El Carbón, han permitido

evidenciar tanto la necesidad de integrar sensibilidad al conflicto como el potencial de las acciones de adaptación para generar co-beneficios en términos de cohesión social. En estos procesos, se identificó que intervenciones que promueven la participación a nivel comunitario, fortalecen capacidades locales y abren espacios para la toma de decisiones inclusivas, no solo reducen vulnerabilidades climáticas, sino que también contribuyen a prevenir el uso inadecuado de recursos, fortalecer la confianza entre actores y consolidar mecanismos de cooperación. Estos aprendizajes refuerzan la importancia de avanzar hacia enfoques de acción climática que, además de ser técnicamente efectivos, sean socialmente legítimos, inclusivos y orientados a la construcción de paz medioambiental en los territorios.

En ambos casos de estudio, las comunidades también identificaron experiencias y propuestas concretas que evidencian el potencial de la acción colectiva y de la acción climática sensible al conflicto para fortalecer la cohesión social y la gobernanza territorial. En Santa María del Carbón, las rondas comunitarias de limpieza, demarcación y vigilancia del territorio, así como la declaratoria de microcuencas, han contribuido a la protección del bosque, la conservación de recursos hídricos y el fortalecimiento de la cooperación entre comunidades e instituciones públicas como el ICF y la SAG. Asimismo, el impulso de cooperativas agroforestales y actividades productivas vinculadas al manejo sostenible del bosque ha favorecido la generación de ingresos y reforzando mecanismos locales de organización y vigilancia territorial. Por su parte, en El Corpus, los procesos de organización comunitaria frente a los impactos de la minería han permitido canalizar acciones colectivas hacia iniciativas de acceso al agua, proyectos productivos y fortalecimiento de capacidades en derechos, participación y veeduría social, además de consolidar redes de apoyo entre comunidades e instituciones locales.

De manera complementaria, en ambos territorios las comunidades visualizaron propuestas orientadas a consolidar medios de vida sostenibles y fortalecer la legitimidad institucional como elementos clave para reducir tensiones y vulnerabilidades. Entre estas destacan el desarrollo de proyectos de agricultura sostenible, la diversificación de actividades productivas y emprendimientos locales, el fortalecimiento de esquemas de supervisión y veeduría ambiental, y la promoción de alternativas económicas como el turismo cultural responsable o la transformación de productos locales con mayor valor agregado. Asimismo, se resaltó la importancia de fortalecer la presencia institucional para garantizar el cumplimiento de marcos legales relacionados con la propiedad colectiva, la protección ambiental y la gestión de los recursos naturales. Estos

hallazgos reflejan cómo las acciones de adaptación y desarrollo territorial, cuando incorporan enfoques participativos e inclusivos, pueden contribuir simultáneamente a la resiliencia climática, la prevención de conflictos y la construcción de paz medioambiental.

Por último, el reporte [Nexo clima, paz y seguridad en Honduras: evidencia científica, puntos críticos y oportunidades para una acción climática sensible al conflicto](#) sintetizó una serie de recomendaciones clave para el diseño y la implementación programas:

- Integrar evaluaciones y análisis de conflicto en los programas de acción climática permite anticipar y mitigar riesgos de daños no intencionados y asegurar que las intervenciones contribuyan a abordar dichas problemáticas y evitar que inintencionadamente se exacerben conflictos en curso.
- Desarrollar e integrar indicadores de paz en las intervenciones de acción climática que permitan monitorear y evaluar cómo estas iniciativas influyen en las percepciones comunitarias cohesión social, seguridad, confianza y estabilidad dentro de la comunidad.
- Potenciar la generación de co-beneficios para la paz de la acción climática a partir del diseño y desarrollo de intervenciones que promuevan la cooperación y la gobernanza inclusiva.

4.2. Protección social adaptativa

La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) se ha posicionado como referente regional en la promoción del enfoque de protección social adaptativa. Esta iniciativa busca fortalecer la resiliencia de las poblaciones más vulnerables mediante la integración de los instrumentos de protección social con las estrategias nacionales y locales de adaptación al cambio climático y reducción del riesgo de desastres. Para ello, SEDESOL, con el apoyo técnico de la Alianza Bioersity-CIAT y otros organismos de la cooperación internacional como el Banco Mundial, La Organización Mundial para las Migraciones (OIM), El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), ha liderado un proceso para diseñar una Política de Protección Social Adaptativa (PSA) que articule respuestas multisectoriales ante los distintos choques que enfrenta la población hondureña.

El marco conceptual de la Protección Social Adaptativa en Honduras planteado por SEDESOL (ver figura 2) reconoce que la pobreza, el desempleo, las desigualdades sociales, la inseguridad alimentaria, la exclusión social y la brecha de género son problemas estructurales que aumentan la vulnerabilidad

de las personas. Al mismo tiempo, identifica una serie de choques, perturbaciones o emergencias recurrentes como los desastres, el cambio climático, las crisis económicas, las crisis sanitarias, los conflictos, los desplazamientos, que agravan esas condiciones estructurales.



Figura 2: Marco Conceptual de Protección Social Adaptativa en Honduras. Fuente: Elaboración propia.

El enfoque de la PSA, integrado en el informe de política pública [*Protección social adaptativa en Honduras: recomendaciones para una estrategia nacional*](#) y desarrollado gracias a las consultas locales participativas y los talleres multiactor en Tegucigalpa, se basa en la articulación de tres sistemas clave: la protección social, la adaptación al cambio climático y la reducción del riesgo de desastres. La intersección entre estos tres sistemas, liderados respectivamente por SEDESOL, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) junto con la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) busca desarrollar una estrategia multisectorial coordinada enfocada en combinar medidas integrales preventivas, reactivas y adaptativas, orientadas a :

- Fortalecer las capacidades de anticipación, respuesta y recuperación de las poblaciones más vulnerables con especial énfasis en aquellas en situación de pobreza y exclusión social.

- Vincular los sistemas de protección social con mecanismos de monitoreo climático, alerta temprana y planificación del riesgo.
- Promover inversiones que reduzcan la exposición y mejoren los medios de vida resilientes.

Para el desarrollo de la política de PSA se llevó a cabo un proceso participativo local de consulta que quedó documentado en el reporte [*Protección Social Adaptativa en Honduras: Diagnóstico Participativo y Propuestas Locales*](#), publicado de manera conjunta entre SEDESOL y la Alianza Bioversity-CIAT. Las consultas se realizaron a través de grupos focales, entrevistas, paseos comunitarios y otros ejercicios participativos, en quince municipios priorizados por su alta vulnerabilidad estructural, vulnerabilidad socioeconómica y exposición a riesgos climáticos.

El proceso de consulta identificó los principales choques que afectan a estas comunidades, incluyendo riesgos constantes de inundaciones, sequías, tormentas tropicales, riesgos epidemiológicos, pérdidas generalizadas de empleo, conflictividad y desplazamientos. De igual forma, en el proceso participativo se identificaron las respuestas pasadas o en curso para hacer frente a estos choques, al igual que las necesidades para fortalecer aquellas que han resultado más efectivas, así como nuevas propuestas, incluyendo la integración de esfuerzos comunitarios e institucionales para desarrollar y robustecer los esquemas de protección social. Las principales propuestas identificadas fueron las siguientes:

- Preparación de albergues con dotación de artículos médicos, sanitarios y de primera necesidad para grupos vulnerables.
- Dotación de uniformes y material escolar para niños en zonas afectadas por desastres.
- Transferencias monetarias condicionales al cumplimiento de protocolos de prevención contra el dengue.
- Programa de emprendimiento con formación y capital semilla para las personas que han perdido su trabajo ante emergencias.
- Fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana y dotación de equipamiento para reducción de riesgo de desastres a los CODELES (Comités de Emergencia Local) con prioridad a zonas rurales y altamente vulnerables.
- Programa de alimentos para pequeños agricultores condicionado a la aplicación de prácticas de agricultura sostenible adaptada al clima.
- Programa de empleo temporal para el fortalecimiento de estrategias comunitarias de prevención y recuperación ante emergencias.
- Dotación de estufas y otros enseres de cocina para las escuelas-albergue para reforzar los programas de alimentación escolar y la preparación de alimentos durante las emergencias.

- Becas para la formación técnica para líderes comunitarios.
- Fortalecimiento de las cajas rurales como instrumentos de protección social adaptativa.

4.3. Movilidad climática

El Gobierno de Honduras, especialmente a través de la Dirección Nacional de Cambio Climático (DNCC) de la SERNA, ha promovido el posicionamiento de la movilidad climática en la agenda nacional. Este compromiso ha quedado reflejado en la creación de una nueva acción estratégica dentro del componente transversal de las NDCs 3.0 que fueron publicadas a inicios de 2026. Dicha acción estratégica está enfocada en la “Creación de una instancia de Cambio Climático y Movilidad Humana” que busque establecerse como una instancia permanente que articule instituciones públicas a diferentes escalas, organismos internacionales y sociedad civil para abordar de manera integral la problemática de la movilidad climática. Esto incluye el desarrollo de lineamientos para la prevención, protección y respuesta ante desplazamientos y migraciones inducidos por eventos climáticos, la promoción de la armonización normativa, la formulación de propuestas para incluir la movilidad humana en los instrumentos de planificación climática, de gestión del riesgo de desastres y de conflictos, así como la generación de evidencia científica sobre las dinámicas de movilidad climática en el país.

Los compromisos establecidos en las NDCs 3.0 en relación con la movilidad climática reflejan, en parte, los intercambios técnicos sostenidos con actores como la OIM y ACNUR, que han contribuido a enriquecer el análisis y las prioridades del país en este ámbito. El trabajo conjunto con la SERNA quedó plasmado en un informe de política pública titulado [Clima, seguridad y movilidad humana: una agenda de acción para Honduras](#) elaborado de manera conjunta, el cual sintetiza tres recomendaciones clave que sirvieron de base en la formulación de la meta sobre movilidad climática incluida en las NDCs 3.0:

- Incorporar la movilidad humana en las políticas climáticas y de seguridad, fortaleciendo la coordinación interinstitucional entre las diferentes secretarías, permitiendo articular acciones transversales.
- Fortalecer la recolección de datos y el conocimiento, invirtiendo en generación de evidencia científica y recolección de datos desagregados por género sobre movilidad climática que permitan identificar a las personas más vulnerables.
- Aprovechar la movilidad humana para la resiliencia y el desarrollo, combinando el fortalecimiento de vías seguras y regulares para la migración con el desarrollo de instrumentos financieros y programas que faciliten el uso productivo de remesas para la adaptación al cambio climático.

Para abordar los retos planteados por la movilidad climática y avanzar con los compromisos adoptados, el gobierno está trabajando en varios frentes, realizando acciones coordinadas y proponiendo nuevas metas y acciones a futuro. La creación de la Mesa Interinstitucional sobre Movilidad Humana por Motivos Ambientales y Cambio Climático, liderada por la SERNA, SEDESOL, COPECO, Cancillería y la IOM, e integrada por diferentes cooperantes e instituciones, supone un importante esfuerzo que busca establecer una mayor colaboración interinstitucional y una respuesta coordinada para el abordaje de esta problemática.

En el marco de las acciones de sensibilización y fortalecimiento de capacidades, se desarrollaron dos procesos formativos orientados a integrar el nexo entre cambio climático y movilidad humana en distintos niveles institucionales. Por un lado, se impartió el curso El nexo de seguridad climática y movilidad humana, dirigido a 28 funcionarios de ACNUR en Honduras y enfocado en introducir fundamentos del cambio climático, tendencias nacionales y su relación con dinámicas de desplazamiento y necesidades de protección, así como en vincular evidencia global del nexo clima-seguridad con el contexto hondureño. Por otro lado, en colaboración académica con FLACSO y el ACNUR, se diseñó e impartió un módulo especializado de 10 horas dentro del Diplomado [Cooperación internacional, desarrollo y gestión de la movilidad humana](#), que reunió a 53 participantes de 26 instituciones públicas y agencias de Naciones Unidas (incluyendo entidades como el Instituto Nacional de Migración, SAG, SENPRENDE, SEMUJER y el Congreso Nacional, entre otras). Este módulo abordó la relación entre seguridad climática y movilidad humana a partir de bases conceptuales y estudios de caso, promoviendo el diálogo intersectorial y fortaleciendo capacidades para incorporar consideraciones climáticas en políticas, estrategias y prácticas institucionales vinculadas al desplazamiento y el desarrollo.

Mediante una colaboración entre el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Alianza Bioversity-CIAT, se trabajó en el fortalecimiento de los instrumentos de recolección de datos para mejorar su capacidad de registrar el desplazamiento asociado a factores medioambientales y climáticos. El trabajo conjunto se incorporando preguntas que captan factores de desplazamiento climáticos, así como indicadores de vulnerabilidad de las personas desplazadas y preguntas destinadas a comprender el posible impacto que el desplazamiento puede crear en las comunidades de acogida, incluyendo tensiones sociales, conflictos y violencia de género. La colaboración continuó con el diseño de una pregunta en la EPHPM 2026 que permitirá recolectar datos nacionales sobre las principales amenazas climáticas percibidas por los hogares, así como su frecuencia y recurrencia temporal.

Adicionalmente, el trabajo colaborativo con el INE también consistió en apoyar los esfuerzos de análisis de datos de la EPHPM de 2024 y la Encuesta Nacional de Migración y Remesas de 2023 para conocer mejor los motivos de desplazamiento, así como los municipios de procedencia y recepción de personas desplazadas en el país. Los datos generados quedaron integrados en el informe de política pública [Desplazamiento relacionado con el clima en Honduras: Evidencias y recomendaciones](#) publicado junto con el INE, así como en el informe de política pública [Clima, seguridad y movilidad humana: una agenda de acción para Honduras](#), publicado junto con la SERNA. En dicho informe se plantearon las siguientes recomendaciones:

- Fortalecer los sistemas de información sobre desplazamiento interno y clima, permitiendo que la generación de datos pueda fortalecer los sistemas de monitoreo de desplazamiento interno de instituciones como COPECO.
- Profundizar en estudios longitudinales sobre trayectorias de movilidad forzada que den seguimiento en el tiempo a hogares desplazados por desastres.
- Identificar territorios críticos de doble exposición a impactos climáticos, e inseguridad y violencia.
- Evaluar los factores socioeconómicos que influyen en las dinámicas de desplazamiento y en la vulnerabilidad climática de poblaciones desplazadas.
- Integrar la movilidad humana en políticas y planes de adaptación y gestión de riesgos con especial énfasis en apoyar a personas desplazadas para reducir su exposición a nuevas amenazas climáticas.
- Fortalecer la comunicación y la cooperación interinstitucional a nivel nacional y regional, impulsando plataformas de diálogo entre instituciones nacionales y organismos regionales e internacionales.





5. Análisis y evidencias de seguridad climática en Honduras

Título	Autor(es)	Año
<i>Perfil climático de Honduras: variabilidad, tendencias y escenarios futuros</i>	Montes & Ayes-Rivera	2025
<i>Intersecciones entre clima, paz y seguridad en Honduras</i>	Higuera-Florez et al.	2025
<i>Intersecciones entre clima, seguridad y movilidad humana en Honduras</i>	Higuera-Florez & Madurga-Lopez	2024
<i>Protección social adaptativa en Honduras: Diagnóstico participativo y propuestas locales</i>	Madurga-Lopez et al.	2025
<i>Protección social adaptativa en Honduras: Recomendaciones para una estrategia nacional</i>	Higuera-Florez et al.	2025
<i>Clima, seguridad y movilidad humana: Una agenda de acción para Honduras</i>	Palou Zuniga et al.	2025
<i>Desplazamiento relacionado con el clima en Honduras: Evidencias y recomendaciones</i>	Higuera-Florez et al.	2026
<i>Nexo clima, paz y seguridad en Honduras: evidencia científica, puntos críticos y oportunidades para una acción climática sensible al conflicto</i>	Madurga-Lopez et al.	2026
<i>Intersecciones entre clima, seguridad y movilidad humana en la comunidad de Cedeño, Marcovia, Departamento de Choluteca, Honduras</i>	Palou-Zuniga & Higuera-Florez	2025
<i>Intersecciones entre clima, seguridad y movilidad humana en la comunidad de San Marcos, Curarén, Departamento de Francisco Morazán, Honduras</i>	Higuera-Florez & Palou-Zuniga	2025
<i>Intersecciones entre conflictividad socioambiental y vulnerabilidad climática en Santa María del Carbón, Honduras</i>	Madurga-Lopez & Higuera-Florez	2026
<i>Intersecciones entre conflictividad socioambiental y vulnerabilidad climática en El Corpus, Honduras</i>	Higuera-Florez & Madurga-Lopez	2026

5. Referencias

Barnett, J., & Adger, W. N. (2007). Climate change, human security and violent conflict. *Political geography*, 26(6), 639-655.

Buhaug H, von Uexkull N. (2021) Vicious circles: violence, vulnerability, and climate change. *Annual Review of Environment and Resources*. 46:545–68.

CESPAD (2024). *Así avanza la conflictividad socioterritorial en Honduras, acentuada por la falta de un abordaje integral*. Autores: Lucía Vikil y Kevin Isidro. Tegucigalpa.

González-Méndez, I., Pons, D., Anderson, T. G., Ayes Rivera, I., & Anchukaitis, K. J. (2025). Impacts of spatial and temporal station availability on gridded precipitation products in Central America. *Earth and Space Science*, 12, e2025EA004720. <https://doi.org/10.1029/2025EA004720>

Higuera-Florez J. & Madurga-Lopez, I. (2024) Intersections of Climate, Security and Human Mobility in Honduras. CGIAR FOCUS Climate Security.

Higuera-Florez, J.; Madurga-Lopez, I. (2026) *Intersecciones entre conflictividad socioambiental y vulnerabilidad climática en El Corpus, Honduras*. CGIAR Climate Security. 70 p.

Higuera-Florez, J. & Palou Zúniga, N. (2025). *Intersecciones entre Clima, Seguridad y Movilidad Humana en la comunidad de San Marcos, Curarén, Departamento de Francisco Morazán, Honduras*. CGIAR FOCUS Climate Security.

Ide, T., Johnson, M. F., Barnett, J., Krampe, F., Le Billon, P., Maertens, L., von Uexkull, N. & VélezTorres, I. (2023). The future of environmental peace and conflict research. *Environmental Politics*, 32(6), 1077-1103.

IDMC (2023). *GRID 2023: Global Report on Internal Displacement*. *Internal displacement and food security*. Disponible en: https://api.internal-displacement.org/sites/default/files/publications/documents/IDMC_GRID_2023_Global_Report_on_Internal_Displacement_LR.pdf

IPCC. (2022). *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* [H.-O. Pörtner, D. C. Roberts, M. Tignor, E. S. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. Okem, & B. Rama (eds.)]. Cambridge University Press.

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). (2023). *Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. [Core Writing Team, H. Lee and J. Romero (eds.)]. Geneva, Switzerland: IPCC, 184 pp. Disponible en: <https://doi.org/10.59327/IPCC/AR6-9789291691647>

Krampe, F., Hegazi, F. and VanDeveer, S.D. (2021). Sustaining peace through better resource governance: Three potential mechanisms for environmental peacebuilding. *World Development*, 144, pp.105508–105508. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105508>

Krampe, F., Kreutz, J., & Ide, T. (2025). "Armed conflict causes long-lasting environmental harms". *Environment and Security*, 0(0). <https://doi.org/10.1177/27538796251323739>

Madurga-Lopez, I.; Higuera-Florez, J. (2026) *Intersecciones entre conflictividad socioambiental y vulnerabilidad climática en Santa María del Carbón, Honduras*. CGIAR Climate Security.

Maradiaga, M.C. (2024). *Hidroeléctrica construida irregularmente en tierras de la reforma agraria amenaza a comunidad indígena en Honduras*. Contra Corriente. Disponible en: <https://contracorriente.red/2024/11/18/hidroelectrica-construida-irregularmente-en-tierras-de-la-reforma-agraria-amenaza-a-comunidad-indigena-en-honduras/>

Medina, L., Pacillo, G., Madurga-Lopez, I. and Läderach, P. (2024). Conflict-sensitive Climate Action: Addressing the root drivers conflict and fragility. CGIAR Issue Brief Series for Informing COP29 | Number 8. Montpellier, France: CGIAR.

Montes, C.; Ayes Rivera, I. (2025) *Perfil climático de Honduras: variabilidad, tendencias y escenarios futuros*. 69 p.

Navarro-Racines, C., Monserrate, F., Llanos-Herrera, L., Obando, D. & Córdoba, J. (2018). *Desarrollo de los Escenarios Climáticos de Honduras y Módulo Académico de Capacitación*. Notre Dame University (2022). *ND-GAIN Country Index, Vulnerability and Readiness*. Descargado de: <https://gain.nd.edu/our-work/countryindex/rankings/>

Pacillo, G., Medina, L., Liebig, T., Carneiro, B., Schapendonk, F., Craparo, A., ... & Läderach, P. (2024). Measuring the climate security nexus: the Integrated Climate Security Framework. *PLOS Climate*, 3(10), e0000280.

Padilla, E., Galeas, I., Matute, E., Padilla, N. & Meza, J. (2024). *Urbanización y proyectos extractivos están acabando con la cordillera de El Merendón*. Ingeniero Ambiental Juan Jose Mejía Calix. Universidad Católica de Honduras Nuestra Señora Reina de la Paz.

Rivero-Rodríguez, S. (2021). *Diagnóstico del sector pesquero y marisquero en el Golfo de Fonseca hondureño*. CETMAR.

Von Uexkull, N., & Buhaug, H. (2021). Security implications of climate change: A decade of scientific progress. *Journal of Peace Research*, 58(1), 3-17.

Wyngaarden, S., Humphries, S., Skinner, K., Tosta, E. L., Portillo, V. Z., Orellana, P., & Dodd, W. (2022). 'This Helps You See Life Differently': Evaluating Youth Development and Capability Expansion in Remote Communities of Honduras. *Progress in Development Studies*, 22(2), 174-195. <https://doi.org/10.1177/14649934211067609>

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo se realizó con el apoyo del Departamento de Asuntos Exteriores de Irlanda (DFAT). Las ideas, opiniones y comentarios que contiene son responsabilidad exclusiva de sus autores y no representan ni reflejan necesariamente la política del DFAT. Agradecemos la colaboración y las valiosas contribuciones de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). La evidencia presentada en este informe fue generada en estrecha colaboración con estas instituciones para apoyar su labor y la toma de decisiones. Asimismo, contó con el apoyo de los programas de ciencia del CGIAR en: Acción Climática; y Seguridad y Fronteras Alimentarias. Queremos agradecer a todos los financiadores que apoyaron esta investigación a través de sus contribuciones al Fondo Fiduciario del CGIAR: <https://www.cgiar.org/funders/>.

ACERCA DE NOSOTROS

El CGIAR Climate Security pretende abordar las brechas de conocimiento sobre el cambio climático y la seguridad alimentaria para informar las políticas y operaciones de paz y seguridad, a través de un enfoque multidisciplinar único. Nuestro principal objetivo es alinear la evidencia científica de clima, tierra y sistemas alimentarios con los esfuerzos de construcción de paz que abordan los conflictos a través de soluciones ambientales, políticas y socioeconómicas basadas evidencias.

Este es un documento de acceso abierto distribuido bajo las condiciones de Creative Commons Attribution License, lo cual permite el uso, distribución y reproducción sin restricciones en cualquier medio, siempre que se cite al autor original y la fuente. Las opiniones expresadas en este documento no reflejan la posición oficial del CGIAR ni de sus organismos donantes. Las denominaciones empleadas en este informe y la forma en que aparecen presentados los datos no implican, por parte del CGIAR, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, zonas o ciudades, o de sus autoridades, ni respecto del trazado de sus fronteras o límites. No puede considerarse que las opiniones expresadas en este documento reflejen la posición oficial del CGIAR o de sus organismos donantes.



© 2026 CGIAR Climate Security.

Esta publicación está licenciada para su uso bajo las condiciones de Creative Commons Attribution License 4.0 (CC BY 4.0).

Para ver esta licencia, visite:

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>.

Autores:

Ignacio Madurga-Lopez, Julián Higuera-Florez, Nohelia Palou, Irma Ayes-Rivera, Bia Carneiro, Jonathan Tsoka, Onivola Minoarivelo, Brigitte Melly, Carlo Montes, Támara Ochoa-Morera & Grazia Pacillo

Cita sugerida:

Madurga-Lopez, I., Higuera-Florez, J., Palou, N., Ayes-Rivera, I., Carneiro, B., Tsoka, J., Minoarivelo, O., Melly, B., Montes, C., Ochoa-Morera, T., & Pacillo, G. (2026). *Perfil de país: Clima, paz y seguridad en Honduras*. CGIAR Climate Security.

Edición gráfica y apoyo editorial:

Támara Ochoa-Morera.

Fotografías:

© Ignacio Madurga-Lopez & Julian Higuera-Florez, Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT/CANVA.

Contacto:

Ignacio Madurga-Lopez

Especialista en clima, paz y seguridad

Líder regional para América Latina del CGIAR Climate Security.

i.madurga@cgiar.org

